

No dejar a nadie atrás: el desafío de la equidad racial en Uruguay

SÍNTESIS DE EVIDENCIAS



Karen R. Antinet '25



Ministerio
de Desarrollo Social



No dejar a nadie atrás: el desafío de la equidad racial en Uruguay

SÍNTESIS DE EVIDENCIAS

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MIDES):

Gonzalo Civila: Ministro de Desarrollo Social

Federico Graña: Subsecretario de Desarrollo Social

Ximena Muñiz: Directora General de Secretaría

Lic. Nicolás Lasa: Director Nacional de Desarrollo Social

Laura Voituret: Gerenta de Promoción Sociocultural

Leticia Rodríguez Taborda: Directora de División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes

Equipo técnico: Valeria Tagliabué, Leticia Glick, Onnika Santos, Martin Recto y

Jaqueline Dos Santos: Coordinadora del Plan Nacional de Afrodecendencia.

FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (UNFPA):

Valeria Ramos Brum: Oficial a cargo UNFPA Uruguay

Juan José Meré: Asesor VIH / Estrategia No dejar a nadie atrás

Marcelo Mondelli: Consultor en Migraciones, derechos humanos y desarrollo

Ana Artigas: Asistente de Dirección y Comunicación estratégica

Freddy Silva: Asistente de Comunicaciones

EDUARDO DELGADO: Autor del Documento

Eduardo Delgado es periodista con 30 años de trayectoria, durante los cuales la agenda de derechos humanos y los temas culturales han sido su prioridad. Actualmente trabaja en TV Ciudad, el canal público de la Intendencia de Montevideo, y escribe en el periódico *la diaria* y la revista *Lento*. Ha colaborado en los diarios *El País*, *El Observador* y *La República*; en el semanario *Brecha*; y en las revistas *Posdata* y *Tres*. También se desempeñó en las radios El Espectador, Alfa FM y AM Libre.

KAREN RODRÍGUEZ ANTÚNEZ: Autora de la imagen original de tapa

Karen Rodríguez Antúnez (Karen Antúnez) es artista plástica oriunda de Cerro Largo, nacida en la ciudad de Melo. Integrante del Colectivo de mujeres afroempreendedoras de Cerro Largo UBUNTU y del colectivo de investigación SANKOFA: Cimarroneando el Archivo. Entre sus obras destacan sus ilustraciones para *Culinaria Casera Ancestral* (UNFPA /Intendencia de Cerro Largo) y sus murales realizados en el Proyecto *Recreo con Arte*, seleccionado y apoyado por la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura (DNC-MEC) en 2023.

CAMILA GÓMEZ GARCÍA: Diseñadora y maquetadora de la publicación

No dejar a nadie atrás: el desafío de la equidad racial en Uruguay.

Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, Uruguay, 2025

Fecha de Publicación: Diciembre, 2025

Los textos incluidos en esta publicación no reflejan necesariamente las opiniones del UNFPA, ni de su Junta Directiva y Estados miembros. Este documento es para distribución general. Se reservan los derechos de autoría a al Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA y se autorizan las reproducciones y traducciones siempre que se cite la fuente. Queda prohibido todo uso de esta obra, de sus reproducciones o de sus traducciones con fines comerciales.

ÍNDICE

| | |
|--|----|
| PRESENTACIÓN | 7 |
| NO DEJAR A NADIE ATRÁS: EL DESAFÍO DE LA EQUIDAD RACIAL EN URUGUAY | 12 |
| Síntesis general | 12 |
| Medir para incidir | 13 |
| Mujeres afrouruguayas y desigualdades de género | 14 |
| Educación y desigualdad racial en Uruguay | 16 |
| Vivienda, segregación territorial y población afrodescendiente | 17 |
| Ley 19122, alcance, límites y desafíos | 19 |
| Población afrodescendiente y déficit de representación | 20 |
| Reflexión final | 22 |
| 1. «ECOS DE LA LÍNEA DE COLOR. AFRODESCENDIENTES E INCLUSIÓN EN URUGUAY» | 25 |
| Síntesis | 25 |
| Algunos datos relevantes | 26 |
| Anexo — Gráficos, esquemas y cuadros extraídos de la publicación «Ecos de la Línea de Color. Afrodescendientes e inclusión en Uruguay» | 30 |
| 2. DESDE SUS VOCES. CAMINOS DE VIDA DE MUJERES AFROURUGUAYAS Y AFROMIGRANTAS DE PAYSANDÚ, RIVERA Y SALTO | 36 |
| Síntesis | 36 |
| Algunos datos relevantes | 37 |
| 3. FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS AFRODESCENDIENTES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONALES: VISIBILIDAD ESTADÍSTICA Y ACCIONES AFIRMATIVAS | 39 |
| Síntesis | 39 |
| Algunos datos relevantes | 40 |
| 4. ESTADO DE SITUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE ACCIÓN AFIRMATIVA DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE Y LEY 19122 | 42 |
| Síntesis | 42 |
| Algunos datos relevantes | 44 |
| 5. INFORME SOBRE BRECHAS Y PROPUESTAS PARA LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE Y AFROMIGRANTE EN URUGUAY | 46 |
| Síntesis | 46 |
| Algunos datos relevantes | 47 |
| 6. PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS AFRODESCENDIENTES DEL VÉRTICE NORTE DEL URUGUAY | 49 |
| Síntesis | 49 |
| Algunos datos relevantes | 50 |

PRESENTACIÓN

El presente documento ha sido elaborado en acuerdo con la División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes del Ministerio de Desarrollo Social (DPPPA-MIDES), con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Su objetivo prioritario es ofrecer una síntesis de los resultados más significativos de seis estudios sobre diferentes dimensiones de la situación de las personas afrodescendientes en Uruguay realizados en los últimos años.

Los seis estudios desarrollados por expertas y expertos de reconocida trayectoria y experiencia contaron con la colaboración y participación de actores significativos tales como la propia DPPPA – MIDES, el Departamento de Ciencias Sociales del Centro Universitario Regional Litoral Norte Salto de la Universidad de la República (CENUR UdelaR), la Organización Internacional de las Migraciones, (OIM), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Colectiva GUYUNUSA, el Grupo ad-hoc de Afrodescendencia del Sistema de Naciones Unidas de Uruguay, así como la sociedad civil de personas afrodescendientes.

Se trata de un documento de síntesis que pretende contribuir con una necesaria doble dinámica de abogacía social e incidencia política centrada en la búsqueda e implementación de acciones más efectivas que permitan revertir las brechas y desigualdades étnico raciales, así como sus causas estructurales, a comenzar por el racismo y todo tipo de discriminación.

Por lo tanto, esta herramienta de presentación de evidencia rigurosa es tanto un diagnóstico actualizado como una palanca de impulso para una acción transformadora ya que en todos los documentos se encuentran pistas y propuestas para programas y políticas públicas. En ese sentido, el documento contribuirá con las acciones territoriales a desplegarse por el equipo técnico de la DPPPA-MIDES, así como por UNFPA, Uruguay y el Grupo ad-hoc de Afrodescendencia del Sistema de Naciones Unidas en Uruguay. Estos datos sistematizados representan un insumo clave para el trabajo conjunto con el abanico de actores locales (Gobiernos departamentales, sociedad civil, academia, sector empresarial) para avanzar de forma cohesionada en la promoción de mayores oportunidades educativas, laborales, culturales para las personas afrodescendientes en cualquier lugar del país.

Finalmente, agradecemos al periodista Eduardo Delgado por el esfuerzo profesional desplegado para lograr la producción de un documento de lectura accesible, y encontrando los resultados más críticos. Igualmente, extendemos a todas y todos la invitación a profundizar en los temas de interés, aprovechando los seis estudios e investigaciones disponibles para consulta y descarga abierta en: <https://uruguay.unfpa.org/es/news/publicaciones-sobre-temas-vinculados-con-poblaci%C3%B3n-afrodescendiente>.

División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes – MIDES
Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA Oficina de Uruguay
Montevideo, diciembre 2025

Publicaciones analizadas

1. ***Ecos de la línea de color. Afrodescendientes e inclusión en Uruguay*** (2025), de Carlos Aloisio, describe la persistencia de una «línea de color» que limita oportunidades laborales, educativas y territoriales. La pobreza, el desempleo y la segregación habitacional afectan con mayor fuerza a las personas afrodescendientes. El documento subraya que las políticas simbólicas deben acompañarse de otras de redistribución efectiva y alianzas entre academia, sociedad civil y medios de comunicación para promover narrativas diversas y visibilizar voces afro.
Disponible en: <https://uruguay.unfpa.org/es/publications/ecos-de-la-l%C3%ADnea-de-color-afrodescendientes-e-inclusi%C3%B3n-en-uruguay>
2. ***Desde sus voces. Caminos de vida de mujeres afrouuguayas y afromigrantes de Paysandú, Rivera y Salto*** (2025), elaborado por el Departamento de Ciencias Sociales del Centro Universitario Regional Litoral Norte Salto de la Universidad de la República (CENUR - UdelaR) y la Colectiva Guyunusa con el apoyo del Grupo ad-hoc de Afrodescendencia del Sistema de Naciones Unidas de Uruguay. El estudio pone rostro y voz a una desigualdad que se multiplica en la intersección entre género, raza y territorio. Las mujeres afrouuguayas y afromigrantes enfrentan precariedad laboral y dificultades en el acceso a derechos. El estudio propone pasar a un enfoque de desarrollo, que traduzca los compromisos normativos en presupuestos y resultados verificables.
Disponible en: <https://uruguay.unfpa.org/es/publications/desde-sus-voce>
3. ***Fortalecimiento de los derechos de las personas afrodescendientes en las políticas públicas nacionales*** (2024), de Orlando Rivero, advierte que la invisibilidad de la población afro es un mecanismo de exclusión real y no sólo simbólico. Aunque el país mejoró la visibilidad estadística, los datos siguen siendo insuficientes para rediseñar políticas eficaces. El informe sostiene que la equidad racial debe ser un requisito para la justicia social y el desarrollo, y no un mero agregado.
Disponible en: <https://uruguay.unfpa.org/es/publications/fortalecimiento-de-los-de-rechos-de-las-personas-afrodescendientes-en-las-pol%C3%ADticas>
4. ***El Estado de situación de la población afrodescendiente y la implementación de la Ley 19122*** (2023) producido por Patricia Gainza y Verónica Barrera muestra que las brechas económicas y laborales se mantienen prácticamente intactas. El cumplimiento del 8% de ingreso laboral al Estado previsto en la ley aprobada en 2013 es mínimo, la pobreza afro duplica la media nacional y la discriminación sigue siendo estructural. El estudio propone integrar las acciones afirmativas con políticas de educación, empleo, vivienda y salud. Esta publicación fue realizada por UNFPA y el Ministerio de Desarrollo Social.
Disponible en: <https://uruguay.unfpa.org/es/publications/estado-de-situaci%C3%B3n-de-la-implementaci%C3%B3n-de-los-mecanismos-de-acci%C3%B3n-afirmativa>
5. ***Informe sobre brechas y propuestas para la población afrodescendiente y afro-migrante en Uruguay*** (2024), elaborado por Tania Ramírez y Carla Méndez con el apoyo del Grupo ad-hoc de Afrodescendencia del Sistema de Naciones Unidas del Uruguay, reúne aportes, testimonios y datos que revelan cómo el racismo institucional atraviesa la vida cotidiana de la población afrodescendiente de Uruguay. A

través de una encuesta, de grupos focales y de entrevistas en profundidad a organizaciones y referentes afro y afromigrantes, las investigadoras identificaron que el racismo institucional es la principal barrera para ejercer derechos, el color de piel y los rasgos o aspecto físico como las razones más frecuentes de discriminación que viven las personas afrodescendientes en Uruguay. El informe propone reforzar la Ley 19122, incorporar un enfoque antirracista en la educación y garantizar acceso a vivienda, salud y empleo digno.

Disponible en: <https://uruguay.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/2025-07/Informe%20afro%20para%20difundir.pdf>

6. ***Producción de conocimiento sobre los derechos de las y los afrodescendientes del vértice norte del Uruguay*** (2024), relatoría de Mauricio Coitiño, recoge las conclusiones de un taller realizado en Salto por el Departamento de Ciencias Sociales del Centro Universitario Regional Litoral Norte Salto de la Universidad de la República (CENUR - Udelar) y el Grupo ad-hoc de Afrodescendencia del Sistema de Naciones Unidas del Uruguay. Participaron más de 35 representantes de las instituciones organizadoras, investigadores e investigadoras, representantes de la sociedad civil afrouroguaya, de gobiernos locales y expertos de Argentina, Brasil y Uruguay. Coincidieron en que el racismo institucionalizado sigue siendo una barrera estructural y en la necesidad de pasar del diagnóstico a políticas efectivas, con presupuesto, seguimiento y educación antirracista. La reparación histórica —se enfatiza— no puede reducirse a gestos simbólicos.

Disponible en: <https://uruguay.unfpa.org/es/publications/producci%C3%B3n-de-conocimiento-sobre-los-derechos-de-las-y-los-afrodescendientes-del>

No dejar a nadie atrás: el desafío de la equidad racial en Uruguay

SÍNTESIS DE EVIDENCIAS



Ministerio
de Desarrollo Social



NO DEJAR A NADIE ATRÁS: EL DESAFÍO DE LA EQUIDAD RACIAL EN URUGUAY

Síntesis general

Las seis publicaciones que sirven de base para este documento de síntesis aportan evidencia sobre la situación de la población afrodescendiente en el país y advierten la necesidad de medidas inmediatas y políticas sostenidas para revertir desigualdades persistentes.

La lectura conjunta de las publicaciones revela un diagnóstico contundente: la población afrodescendiente, y en particular las mujeres afro, continúa marcada por desigualdades profundas que no retroceden al mismo ritmo que la del resto de la población. La pobreza en Uruguay tiene un componente racial decisivo y la combinación entre racismo estructural, desigualdad socioeconómica acumulada y distribución territorial adversa configura un entramado difícil de romper. Aunque más del 10% de la población se reconoce como afrodescendiente, su inclusión real sigue rezagada y los avances legales no han logrado traducirse en igualdad efectiva.

La brecha de pobreza de la población afrodescendiente duplica la de la población no afro y se mantiene incluso en etapas de crecimiento económico. Si bien el país mejoró indicadores generales durante la última década, la reducción de la pobreza fue menor entre los hogares afro. La desigualdad opera de manera selectiva y sistemática, el país puede avanzar en promedio y, al mismo tiempo, dejar atrás a los mismos de siempre.

Esta desigualdad no afecta únicamente a quienes la padecen. Tiene efectos económicos, institucionales y sociales de alcance general, puesto que alimenta la pobreza, degrada la cohesión social y limita el potencial de desarrollo del país. En cuatro áreas de desigualdad —la educación, el trabajo, la salud y la vivienda— se concentran los eslabones del círculo de pobreza que aún atrapa a gran parte de la población afrodescendiente en Uruguay. No es casualidad que estas cuatro dimensiones sean también las más mencionadas en los documentos, en ellas se reflejan las diferencias que persisten entre derechos y realidades. Romper ese círculo exige reducir esas distancias y avanzar hacia una igualdad efectiva.

Uruguay cuenta hoy con evidencia suficiente para actuar, lo que incluye datos, diagnósticos y rutas posibles identificadas. Lo que falta es hacer, transformar esa información en políticas sostenidas, medibles y con prioridad institucional.

En uno de los documentos se retoma la idea de la «línea de color» formulada por el académico y escritor afro americano W. E. B. Du Bois en 1903, para afirmar que en Uruguay esa frontera racial opera con sutileza, pero de manera persistente. Aparece en salarios, desempleo, segregación residencial, recorridos educativos, acceso a puestos de autoridad y en la forma en que los sistemas recogen y procesan información.

Estas seis publicaciones operan entonces como un espejo, no uno que muestra un país desigual por accidente, sino un Uruguay cuya desigualdad está organizada racialmente. La intersección entre género, clase, territorio y etnicidad no es una teoría académica, está presente en la vida diaria de quienes casi siempre encuentran barreras.

Visibilizar, reconocer, conmemorar, no basta. La igualdad racial exige cambios institucionales profundos, presupuestos definidos, mecanismos de seguimiento y voluntad política sostenida. Mientras no se actúe sobre estos elementos, la «línea de color» seguirá influyendo —a veces de forma solapada, otras evidente— en la vida de cientos de miles de personas y no se cumplirá con el compromiso de «No dejar a nadie atrás», que impulsa Naciones Unidas como puntal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Medir para incidir

La construcción de información sobre la población afrodescendiente en Uruguay es reciente. Hasta mediados del siglo xx, el país prácticamente no producía estadísticas sobre este grupo. Durante el período esclavista sí existían registros, pero no como datos poblacionales, eran registros de propiedad en los que las personas esclavizadas aparecían anotadas como bienes y no como sujetos. Esa lógica documental explica por qué Uruguay ingresó al siglo xx sin información social ni demográfica sobre la población afrodescendiente, un vacío presente durante décadas.

El punto de quiebre llegó recién en 2006, cuando las encuestas oficiales incorporaron por primera vez una pregunta de auto identificación étnico-racial. Ese cambio metodológico inauguró en el país la «visibilización estadística», la que se define como la inclusión de la dimensión étnico-racial en los sistemas de producción de datos oficiales de información estadística de los estados y se la considera una precondition para el diagnóstico, evaluación, diseño, asignación de recursos y monitoreo de las políticas públicas.

El segundo hito fue el censo de 2011, el primero en captar esta dimensión a escala nacional. Su incorporación permitió dimensionar la presencia afrodescendiente en todo el territorio y generó una base inédita para analizar desigualdades. Desde entonces, la Encuesta Continua de Hogares mantuvo la pregunta año a año, lo que creó una serie histórica estable.

El último hito es el censo de 2023. La proporción de personas que se reconocen afrodescendientes pasó de 8,1% en 2011 a 10,6% en 2023, con aumentos en todos los departamentos. El sociólogo Carlos Aloisio advierte, sin embargo, que este censo presenta un 12,5% de datos perdidos en las variables de ascendencia simple y principal, especialmente concentrados en zonas donde la población afrodescendiente es más numerosa, por lo que el porcentaje de afrodescendientes puede ser más alto.

A esta evolución sostenida se superpone la de los registros administrativos del propio Estado, un proceso que avanza con mayor lentitud. El informe *El Estado de situación de la población afrodescendiente y la implementación de la Ley 19122* documenta que solo una parte de los organismos públicos releva la variable étnico-racial según las preguntas sugeridas por el Instituto Nacional de Estadística. Un 47% no lo hace y entre quienes lo realizan predominan los registros incompletos, heterogéneos o en papel. Las entrevistas institucionales muestran que, aun cuando el dato se registra, muchas veces no se utiliza para planificar, evaluar o asignar recursos.

Es necesario producir más datos desagregados sobre la violencia basada en género en la población afro, y persiste la ausencia de registros sistemáticos en salud, educación, seguridad social y gobiernos departamentales. Esta falta de uniformidad hace que el país no cuente con información actualizada sobre cuántas personas afrodescendientes acceden a becas, programas sociales, servicios públicos o puestos de trabajo.

Los estudios recientes también permitieron conocer nuevos datos. Uno de ellos es la distribución territorial actual de la población afrodescendiente: Artigas (22.3%) y Rivera (21.4%) concentran las proporciones más altas del país, seguidos por Tacuarembó, Salto y Cerro Largo. Departamentos con menor proporción —como Colonia, Flores y Soriano— también registraron aumentos significativos. Montevideo, con la mayor cantidad absoluta de afrodescendientes, creció de 9% a 11%. Otro dato importante proviene de la estructura por edad: la población afrodescendiente tiene más personas jóvenes y en edad activa que el resto de la población.

Organismos internacionales han subrayado limitaciones en los datos del Estado. CEPAL y UNFPA indicaron que la identificación de desigualdades requiere datos desagregados por grupo poblacional y advierten que la falta de registros homogéneos impide analizar brechas estructurales. Otro desafío pendiente es la información que el Estado produce en su funcionamiento cotidiano. Su falta de uniformidad, sus lagunas y su uso limitado siguen siendo obstáculos para transformar la evidencia disponible en herramientas efectivas para el diseño y monitoreo de políticas públicas.

En Uruguay, la producción de datos parece un espejo empañado: refleja algo, pero nunca lo suficiente. Los documentos coinciden en que la mirada estadística del país avanzó, pero lo hace con tropiezos y vacíos. El espejo todavía tiene zonas que no devuelven imagen. Sin embargo, a casi dos décadas del comienzo de la medición, Uruguay cuenta con una base estadística más sólida que en cualquier momento anterior. El avance iniciado en 2006, consolidado en 2011 y actualizado en 2023, permitió construir una fotografía demográfica más nítida.

Mujeres afrouuguayas y desigualdades de género

La intersección entre género, raza y territorio marca de forma decisiva la vida de las mujeres afrouuguayas. Los documentos muestran que estas dimensiones no actúan de manera aislada, sino que se refuerzan entre sí y producen desventajas acumulativas que impactan en empleo, ingresos, educación, salud, autonomía y participación política. Las mujeres afro enfrentan desigualdades que combinan el racismo estructural, la discriminación de género y las brechas territoriales asociadas a condiciones habitacionales más precarias y menor acceso a servicios.

Las organizaciones afrodescendientes marcan que estas desigualdades son el resultado de un racismo institucional que atraviesa todas las dimensiones de la vida social. Desde la sociedad civil organizada reclaman políticas que integren de manera efectiva la perspectiva de género, étnico-racial e interseccional. Esto incluye el acceso a empleo digno, incorporar en la sociedad la educación antirracista, políticas de vivienda, fortalecimiento de la participación política y programas específicos para mujeres afromigrantes.

En el mercado de trabajo, la intersección entre racismo y desigualdad de género es notoria. Las mujeres afro tienen mayores dificultades para acceder a empleos formales, enfrentan tasas más altas de desempleo y reciben salarios inferiores a los de las mujeres no afro. La segmentación laboral las concentra en tareas de baja calificación y alta informalidad. Incluso cuando alcanzan niveles educativos similares, persisten brechas explicadas por discriminación racial y de género. La Ley 19122 generó algunas oportunidades en el sector público, pero sin su total cumplimiento y políticas complementarias el impacto sigue siendo acotado.

La desigualdad educativa también muestra cómo operan juntas las dimensiones de género, raza y territorio. Las niñas y adolescentes afro acceden con mayor frecuencia a centros educativos con menos recursos, enfrentan episodios de discriminación en las aulas y registran mayores tasas de extraedad. Estas trayectorias más inestables reducen la probabilidad de finalizar la educación media y restringen el acceso a la educación terciaria. En los territorios más vulnerables, donde vive una proporción significativa de población afrodescendiente, estas brechas se agravan.

Las mujeres afrouruguayas presentan tasas de pobreza e indigencia más altas que el promedio nacional. La dimensión territorial profundiza estas desigualdades, la sobrerrepresentación en asentamientos irregulares implica viviendas precarias, menor acceso a infraestructura, transporte insuficiente y entornos con oportunidades laborales limitadas. Estas condiciones afectan directamente la estabilidad económica y la calidad de vida de sus familias, incrementando la vulnerabilidad social.

La intersección entre raza y género también se refleja en la exposición a violencias y discriminación, lo que conlleva un impacto acumulativo que condiciona su autonomía y limita sus oportunidades. La combinación de racismo institucional y desigualdades territoriales intensifica estas experiencias.

Las publicaciones también evidencian diferencias en materia de fertilidad y maternidad. Las mujeres afro presentan, en promedio, tasas de fecundidad más altas y una mayor probabilidad de ser madres a edades más tempranas. Estas diferencias no responden sólo a decisiones individuales aisladas, sino a un conjunto de desigualdades estructurales, como menor acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva, barreras económicas y territoriales para el uso de métodos anticonceptivos y una mayor exposición a condiciones de vida precarias. La maternidad temprana, combinada con trayectorias educativas más inestables, limita el acceso al empleo formal y reduce las posibilidades de continuidad educativa.

En muchos hogares afro, las mujeres asumen además responsabilidades ampliadas de cuidado, tanto de hijos e hijas como de otros integrantes del hogar. Esta sobrecarga reproduce un círculo de restricciones económicas y laborales que profundiza la desigualdad.

La baja representación afrodescendiente en los espacios de toma de decisión se vuelve aún más marcada para las mujeres. Su presencia en cargos políticos, técnicos y de liderazgo institucional es mínima, lo que debilita la capacidad de incidir en la agenda pública. Sin participación efectiva, los problemas específicos de las mujeres afro quedan subrepresentados o sin respuesta.

Las desigualdades que enfrentan las mujeres afrouruguayas no pueden entenderse sin considerar cómo se entrelazan el género, la raza y el territorio. Esta intersección define sus oportunidades, limita sus trayectorias y profundiza brechas históricas. Las desigualdades persistirán y continuarán condicionando la vida de las mujeres afrouruguayas si no se actúa en corregir de manera estructural las diferentes dimensiones mencionadas.

Educación y desigualdad racial en Uruguay

La educación es uno de los ámbitos donde la desigualdad racial se observa con mayor nitidez en Uruguay. Los datos muestran que las personas afrodescendientes enfrentan más obstáculos para acceder, permanecer y avanzar en el sistema educativo. Estas brechas se explican por estructuras de desigualdad históricas, que continúan reproduciendo desventajas. La población no afro comienza su trayectoria educativa en mejores condiciones y con más oportunidades.

La evidencia también confirma que el nivel educativo influye directamente en la probabilidad de pobreza. En los hogares afro donde la persona jefa completó secundaria o terciaria, el riesgo de pobreza disminuye alrededor de 12%. Sin embargo, este efecto es menor que en la población no afro, porque las desigualdades presentes desde la primera infancia condicionan el recorrido educativo.

Las diferencias en años de educación aprobados se mantienen estables para todos los grupos etarios. Entre 2017 y 2023, el nivel educativo general aumentó, pero la distancia relativa entre población afro y no afro no se redujo. Los resultados de las pruebas PISA muestran un rezago sostenido en comprensión lectora entre estudiantes afrodescendientes. Este menor desempeño no se explica únicamente por factores individuales. Las diferencias en condiciones de vida, el acceso desigual a centros educativos de calidad y las experiencias de discriminación inciden directamente.

La irregularidad en las trayectorias educativas es otra señal significativa. Las tasas de extraedad —estudiantes que cursan un nivel por encima de la edad recomendada— son más altas en la población afro, tanto en educación media como en la terciaria. Las niñas y niños afro enfrentan desventajas que comienzan antes del ingreso al sistema educativo. Se registran menores niveles de acceso a servicios de salud, mayores dificultades económicas y condiciones habitacionales más precarias. La pandemia amplificó estas desigualdades, afectando la continuidad educativa y el nivel de apoyo disponible en los hogares.

Las investigaciones indican que muchas personas afro mencionan la escuela como el primer lugar donde experimentan discriminación racial, lo que afecta su permanencia y rendimiento. La falta de referentes afro en roles docentes y la escasa presencia de la historia afrodescendiente en la currícula refuerzan esta situación.

En la educación terciaria y universitaria, la presencia afrodescendiente es menor que la población general. La formación docente y profesional no incorpora de manera sistemática contenidos sobre racismo estructural, lo que genera resistencias institucionales ante medidas como el registro étnico-racial. Los documentos recomiendan aumentar la presencia afro en la docencia y el alumnado universitario y fortalecer la relación entre universidades y organizaciones afro.

La posición de ventaja histórica de la población no afrodescendiente se sostiene en prácticas e instituciones que continúan reproduciendo desigualdades. El legado de la esclavitud y la discriminación estructural sigue influyendo en el acceso a educación, empleo y bienestar. Esta diferencia de base configura una deuda histórica aún pendiente, por eso, las brechas educativas deben analizarse en relación con el racismo estructural. Las desventajas acumuladas en materia de salud, vivienda, ingresos y empleo repercuten directamente en el desempeño educativo. El resultado es un ciclo regresivo: dificultades en la educación temprana, menores ingresos y, nuevamente, menos oportunidades para que las generaciones siguientes avancen.

Los y las autoras de los documentos coinciden en que las políticas educativas universales, aun cuando mejoran el acceso general, no han logrado reducir las brechas que afectan a la población afrodescendiente. Proponen adoptar un enfoque antirracista y reparatorio que actúe sobre las causas estructurales de la desigualdad.

La incorporación sistemática de la perspectiva étnicoracial en la currícula es una condición básica para cambiar la experiencia educativa. También es necesaria una transformación en la formación docente, de modo que los equipos educativos cuenten con herramientas para identificar y abordar prácticas discriminatorias, sumar políticas que sostengan la continuidad educativa, incluidas acciones afirmativas, becas y programas de apoyo para compensar desigualdades de origen. Reducir la segregación escolar mediante mecanismos de asignación equitativa y criterios de inclusión es un punto central.

Ningún avance será sostenible sin un sistema de registro fuerte, que permita medir brechas y evaluar políticas. Es necesario que las instituciones educativas y estatales asuman de forma explícita la prevención del racismo y la promoción de la igualdad racial.

Reducir las diferencias y reparar la deuda histórica requiere políticas específicas, sostenidas y con perspectiva antirracista. De lo contrario, la igualdad educativa seguirá siendo una meta distante.

Vivienda, segregación territorial y población afrodescendiente

La vivienda y el territorio conforman un eje estructural de desigualdad para la población afrodescendiente en Uruguay. Las cifras disponibles y la evidencia histórica coinciden en que las personas afro continúan enfrentando barreras persistentes para acceder a una vivienda digna y habitar territorios que no limiten sus oportunidades. La concentración residencial en zonas precarizadas, la expansión de asentamientos irregulares y la herencia de patrones de exclusión racializada configuran cartografías en las que las desigualdades no son un asunto abstracto, sino una experiencia cotidiana para miles.

El acceso a la vivienda actúa como un pilar de autonomía económica. Ser propietario amplía el abanico de posibilidades financieras, habilita el uso de la vivienda como garantía para créditos productivos, permite a los adultos mayores mejores cuidados y posibilita la transmisión intergeneracional de bienestar. Sin embargo, esta dimensión clave muestra brechas profundas según la ascendencia étnico-racial.

Si bien desde 2010 a 2024 se observa una reducción en la brecha entre afrodescendientes y no afro en la propiedad de vivienda y terreno, la caída general de propietarios en mejores condiciones sugiere un deterioro del bienestar, no un avance sustantivo. A esto se suma que un porcentaje muy alto de quienes son propietarios únicamente de su vivienda lo son de unidades ubicadas en asentamientos irregulares, realidad que golpea con mayor fuerza a la población afrodescendiente. En 2024, el 77,8% de los propietarios afro en esta categoría habitaba en asentamientos.

En materia de privaciones habitacionales persiste una diferencia marcada. En 2023, el 43% de las personas afro presentaba privaciones de vivienda, frente al 24% de las personas no afro. Aunque los indicadores han mejorado respecto a décadas anteriores, la distancia se mantiene.

El vínculo entre ascendencia étnico-racial y residencia en asentamientos irregulares es uno de los aspectos más críticos de esta problemática. Entre 2022 y 2023, el 11,3% de las personas afro vivían en asentamientos irregulares, en tanto que el 4,4% de la población no afro lo hacía en el mismo periodo. En Montevideo las diferencias son aún más agudas, entre 2022 y 2023, el 18,5% de las personas afro residían en asentamientos irregulares, frente a 7,5% de las no afro. Esta brecha evidencia que la segregación residencial se vuelve un mecanismo que reproduce desigualdad.

La segregación territorial no es espontánea, responde a decisiones políticas históricas, sesgos institucionales y prácticas del mercado inmobiliario que expulsan a determinadas poblaciones hacia los márgenes. Esta exclusión limita el derecho a la ciudad —acceso equitativo a servicios, transporte, espacios públicos, empleo y seguridad— y restringe la posibilidad de prosperar.

La concentración de la población afro en zonas de menor desarrollo, sumada a su sobrerrepresentación en sectores laborales peor remunerados, fortalece un círculo de pobreza, precariedad habitacional y baja movilidad social. La vivienda es así un dispositivo que reproduce desigualdad intergeneracional.

El territorio uruguayo presenta una distribución marcadamente desigual de la población afrodescendiente. Dos tercios vive en la región del vértice norte —Artigas, Salto, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y Rocha—, zonas con menor desarrollo humano, menor inversión estatal y condiciones laborales más precarias. En Montevideo, la segregación adopta un carácter urbano: barrios periféricos, menor acceso a infraestructura, transporte limitado, entornos que dificultan la movilidad social. Las posibilidades de mejorar ingresos, educación o calidad de vida quedan condicionadas por la dirección en la que se vive.

La desigualdad territorial también se expresa en otro hecho revelador: zonas con más población afro fueron las más afectadas por los «puntos ciegos» del censo 2023. Allí se omitió información justamente donde más se necesita para orientar políticas públicas. La invisibilidad estadística refleja, simbólica y materialmente, la posición marginal asignada a estas comunidades.

Los análisis recientes y las voces de las organizaciones afro coinciden en que la política habitacional requiere un giro reparatorio, con acceso a vivienda digna, reparto de tierras, garantizar transporte, servicios, oportunidades de trabajo digno, habilitación de fincas para proyectos comunitarios, recuperación de inmuebles para vivienda social y reconocimiento del racismo estructural que rige el mercado inmobiliario.

El desafío es doble, mejorar las condiciones materiales y democratizar el acceso al territorio. Esto implica intervenir donde históricamente no se ha intervenido y avanzar en políticas urbanas que integren en lugar de excluir.

Esta geografía de la desigualdad es un sistema que moldea vidas y oportunidades. Sin políticas enfocadas en reparar, redistribuir e integrar, la segregación territorial seguirá perpetuándose. Garantizar el derecho a la vivienda y a la ciudad para las personas afrodescendientes es indispensable para construir un país más justo, más igualitario y más consciente de sus deudas históricas.

Ley 19122, alcance, límites y desafíos

La Ley 19122, aprobada en 2013, introdujo por primera vez acciones afirmativas para la población afrodescendiente en Uruguay. Su creación supuso el reconocimiento estatal de que la población afrodescendiente ha sido históricamente víctima del racismo, de la discriminación y la estigmatización desde el tiempo de la trata y tráfico esclavista y que estas desigualdades no pueden ser abordadas únicamente con políticas universales. Hoy, más de una década después, el balance muestra avances puntuales, resistencias institucionales y desafíos que siguen condicionando su capacidad de reducir brechas estructurales.

La norma define tres áreas de acción: educación, empleo público e incorporar y promover la investigación de los aportes a la nación de la cultura afrodescendiente y su pasado de esclavitud y estigmatización. Esto incluye becas y mecanismos de apoyo para estudiantes afrodescendientes, la reserva de cómo mínimo el 8% de los ingresos de funcionarios al Estado para personas afrodescendientes y medidas destinadas a aumentar su visibilidad.

El diagnóstico que la ley incorpora es clave, puesto que indica que la desigualdad racial es estructural y, por lo tanto, requiere intervenciones específicas. Aun así, el año de mayor cumplimiento de esta norma fue el 2018 con apenas el 3,29% de ingresos laborales de personas afrodescendientes al Estado (2,24% en 2019, 0,69% en 2020, 0,8% en 2021 y 1,8% en 2022), lejos del 8% mínimo exigido por la propia ley. La baja ejecución no responde a falta de población ni de normativa, sino a la persistencia del racismo institucional y la ausencia de voluntad política.

Las organizaciones afrodescendientes valoran el avance simbólico y político que supuso la aprobación de la ley, pero advierten que su implementación ha sido lenta y parcial. Reclaman mecanismos efectivos para cumplir con los porcentajes previstos en la norma, evitar que los cupos laborales queden vacíos, formación obligatoria en antirracismo para funcionarios públicos y equipos docentes, mejor seguimiento estadístico y políticas complementarias que permitan abordar las múltiples dimensiones de la desigualdad.

Tras su aprobación, la Ley 19122 dio lugar a cambios, el racismo comenzó a ocupar un lugar más visible en la agenda pública y estatal. Se incrementó el acceso de personas afrodescendientes a becas y programas educativos, y la cuota del 8% permitió que un número creciente de personas afrodescendientes ingresara al empleo público, aunque de manera mucho menor a la prevista en la ley. También se avanzó en la institucionalización del registro étnico-racial, un paso necesario para producir datos y monitorear desigualdades. Sin embargo, su aplicación sigue siendo desigual y depende de la voluntad de cada organismo. A esto se agrega que el registro étnico-racial continúa fragmentado y su uso, aún discontinuo, limita la posibilidad de evaluar con precisión los resultados de la ley.

Sí hay coincidencia en que el alcance de la norma es limitado si no se acompaña de transformaciones más profundas. Las cuotas y becas ampliaron el acceso, pero no redujeron las brechas educativas de origen ni la segregación escolar, y tampoco lograron modificar prácticas institucionales que reproducen desigualdades. Los centros educativos siguen registrando casos de racismo, baja expectativa académica hacia estudiantes afrodescendientes y una ausencia persistente de docentes afro en posiciones de referencia.

La Ley 19122 abrió un camino a pesar de su escasa aplicación, pero no transformó la estructura que sostiene la desigualdad racial en Uruguay. La protección de las trayectorias educativas, el cumplimiento efectivo de la cuota laboral, la formación antirracista de funcionarios y docentes, la reducción de prácticas discriminatorias en los sistemas educativo y estatal, ampliar la formación en racismo estructural y acompañar la ley con políticas reparatorias más amplias, son parte importante de los desafíos.

La entrada en vigor del Segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes de las Naciones Unidas (2025-2034) ofrece un marco político importante para fortalecer la implementación de la Ley 19122. La resolución 79/193 de Naciones Unidas reafirma tres objetivos centrales: garantizar derechos económicos, sociales y políticos; promover el reconocimiento y la contribución de las comunidades afro; y fortalecer los marcos jurídicos antidiscriminación. Estos lineamientos coinciden con las debilidades detectadas en la aplicación de la ley en Uruguay.

El Segundo Decenio funciona como una oportunidad para ordenar prioridades, corregir inercias y articular la ley con políticas de mayor alcance. La agenda internacional pone el foco en mejorar los sistemas de seguimiento, fortalecer los marcos normativos y exigir el cumplimiento efectivo de las políticas públicas. En el plano local, esto implica reforzar la aplicación de la cuota del 8%, mejorar la producción de datos, incorporar formación obligatoria en racismo estructural y coordinar acciones en educación, empleo y territorio.

A doce años de la Ley 19122, Uruguay está ante una encrucijada: puede dejar que la norma quede como un gesto simbólico y sin cumplir con su contenido, o convertirla en motor real de equidad. Lo que está en juego es la capacidad del Estado para reducir brechas históricas que siguen condicionando la vida de la población afrodescendiente.

Población afrodescendiente y déficit de representación

La población afrodescendiente casi no está presente en los ámbitos donde se definen las políticas públicas. Esta ausencia no es circunstancial, sino un patrón que atraviesa distintos gobiernos y estructuras estatales. Su consecuencia es directa, puesto que las decisiones se toman sin la participación de quienes viven las desigualdades raciales.

Según datos relevados por Naciones Unidas, menos del 2% de quienes ocupan cargos de liderazgo en el sector público son afrodescendientes, una cifra ínfima si se la compara con su peso demográfico. La presencia afrodescendiente en el Parlamento, en ministerios, direcciones nacionales, empresas públicas, intendencias y organismos autónomos es mínima. La situación es aún más marcada para las mujeres afrouruguayas, que enfrentan una doble exclusión por razones de género y étnico-racial. La subrepresentación también se verifica en espacios técnicos donde se diseñan y evalúan políticas, lo que reduce la posibilidad de incorporar perspectivas diversas en la toma de decisiones.

Esta ausencia genera un efecto acumulativo, ya que sin personas afrodescendientes en posiciones de liderazgo se consolida la idea de que el poder político y técnico es un ámbito ajeno a esta población. Al mismo tiempo, se limita la posibilidad de influir en debates centrales sobre educación, empleo, cuidados, vivienda acceso a servicios y violencia institucional.

La falta de representación tiene impactos concretos en las prioridades del Estado. La ausencia de voces afrodescendientes en los espacios donde se discuten presupuestos, se diseñan programas o se toman decisiones estratégicas explica por qué muchas de estas políticas avanzan de forma lenta o fragmentada.

Los documentos identifican barreras que dificultan el acceso de personas afrodescendientes a puestos de decisión. Entre ellas se encuentran trayectorias educativas más frágiles debido a desigualdades previas, menor acceso a redes políticas y profesionales, estereotipos que condicionan la percepción de liderazgo, ausencia de mecanismos de selección con enfoque étnico-racial y requisitos formales que no toman en cuenta puntos de partida desiguales. Este conjunto de obstáculos conforma un circuito en que la falta de representación reproduce la invisibilidad y dificulta corregir los sesgos institucionales.

La subrepresentación afro se extiende más allá del Estado. En universidades, gremios, sindicatos y centros de investigación la presencia afrodescendiente también es limitada. La falta de referentes en posiciones de autoridad técnica o académica debilita la capacidad de incidir en debates públicos y de transformar narrativas que reproducen estereotipos raciales.

La situación es especialmente visible en el sistema educativo, donde la falta de docentes afrodescendientes limita la construcción de referentes positivos para niñas, niños y adolescentes afro, y contribuye a expectativas académicas más bajas.

En los medios de comunicación ocurre algo parecido, la población afrodescendiente es casi invisible en las pantallas, las radios y las redacciones. No sólo faltan periodistas, editores, productores y comunicadores afro, sino que además los contenidos suelen reforzar estereotipos o relegar los temas étnico-raciales a efemérides culturales o notas de color. La narrativa mediática, lejos de desafiar el racismo, muchas veces lo naturaliza o lo suaviza. Cuando aparece una persona afro en televisión o en las páginas de un diario, suele ser asociada solo a la pobreza, el deporte o el carnaval. Rara vez ocupa un rol experto, institucional o de autoridad. El tema no es sólo la representación, sino quién define la agenda, quién interpreta los datos y quién elige las historias que merecen ser contadas.

El inicio del Segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes es también una oportunidad para impulsar cambios concretos en la participación política afro en Uruguay. Naciones Unidas plantea como objetivo asegurar la participación plena e igualitaria de las personas afrodescendientes en todos los ámbitos de la sociedad, un lineamiento que coincide con la necesidad local de fortalecer la representación en cargos de conducción y en espacios técnicos.

La ausencia de personas afrodescendientes en los espacios de decisión constituye un elemento central en la reproducción de la desigualdad racial en Uruguay. Mientras la representación siga siendo mínima, las políticas públicas tenderán a ser diseñadas desde miradas parciales que no reflejan la diversidad del país ni las experiencias de quienes enfrentan de manera cotidiana prácticas discriminatorias. Un desafío de los próximos años es abrir el acceso al poder político y técnico para construir instituciones más representativas y políticas más justas.

Reflexión final

El racismo estructural en Uruguay no es un fenómeno abstracto, se expresa en indicadores concretos de bienestar, en oportunidades negadas y en trayectorias marcadas por barreras persistentes. Su capacidad de adaptarse y volverse imperceptible explica su permanencia más allá de avances legales y compromisos políticos. La evidencia recopilada en estos documentos muestra la incidencia de la interacción entre discriminación racial, desigualdades de género y condicionamientos territoriales en la pobreza afrodescendiente.

Sin políticas focalizadas e interseccionales, estas brechas seguirán reproduciéndose. Incorporar la dimensión étnico-racial en todas las etapas de las políticas sociales y avanzar en medidas reparatorias no es un acto de caridad, sino una obligación democrática y de justicia histórica indispensable para construir un país —como expresa un testimonio presente en uno de los informes— «donde ser afro no determine oportunidades».

EDUARDO DELGADO

PUBLICACIONES ANALIZADAS

Síntesis

1. «ECOS DE LA LÍNEA DE COLOR. AFRODESCENDIENTES E INCLUSIÓN EN URUGUAY»

Síntesis

En Uruguay, más del 10% de la población se reconoce como afrodescendiente. Es la principal minoría étnico-racial del país, pero también el colectivo con mayores dificultades para lograr una inclusión social efectiva. Los avances normativos y los discursos de igualdad no se han traducido todavía en resultados concretos.

El informe *Ecos de la línea de color. Afrodescendientes e inclusión en Uruguay*, muestra que las brechas estructurales persisten. Las personas afrodescendientes enfrentan mayores tasas de desempleo, salarios más bajos y menor estabilidad laboral. Viven con más frecuencia en barrios segregados, en condiciones habitacionales precarias, tienen menor acceso a la educación superior y escasa representación en los espacios de decisión pública. También siguen sub representadas en los medios de comunicación y en los registros oficiales, donde la información racializada continúa siendo parcial o de baja calidad. Esa invisibilidad impide dimensionar las desigualdades y frena la respuesta estatal.

No se trata de un rezago cultural, sino de la continuidad de una «línea de color» poco visible que sigue condicionando las oportunidades. Uruguay cuenta con una ley de acciones afirmativas (19.122), pero su implementación es desigual y carece de mecanismos de monitoreo y evaluación. Las políticas simbólicas —visibilidad cultural, conmemoraciones, presencia en el discurso— deben ir acompañadas de redistribución efectiva, con cupos en el empleo público, acceso a crédito y programas productivos, presupuestos diferenciados y formación técnica focalizada.

Para quienes toman decisiones, el informe deja el mensaje que la igualdad racial no se alcanza sin datos, sin recursos y sin voluntad política. Incorporar la variable étnico-racial en todas las políticas públicas, fortalecer los sistemas de información y garantizar la participación afrodescendiente en el diseño y seguimiento de esas políticas son pasos urgentes.

El análisis evidencia que las políticas universales, aun bien intencionadas, no han cerrado las brechas entre la población afrodescendiente y el resto de la sociedad uruguaya. El reconocimiento simbólico (incluir referencias afro en currículos, conmemoraciones, visibilidad cultural) es necesario, pero insuficiente si no se traduce en acceso real a recursos, empleo, crédito y presupuestos específicos. Solo con medidas de redistribución podrá avanzarse en resultados hacia una igualdad sustantiva.

El documento también subraya la importancia de un enfoque interseccional que contemple las múltiples dimensiones de la exclusión. Ser mujer, afrodescendiente y de bajos ingresos, por ejemplo, multiplica las desventajas. Por eso, la transversalidad del enfo-

que étnico-racial en las políticas nacionales debe acompañarse de mecanismos que garanticen equidad real y resultados verificables.

Uruguay enfrenta el desafío de trascender el universalismo y diseñar estrategias específicas que aseguren la participación plena de las personas afrodescendientes en la vida social, política y económica. No basta con reconocer la identidad afro; es necesario redistribuir oportunidades y recursos de forma justa. El informe plantea además la necesidad de sensibilizar en los medios de comunicación para evitar la reproducción de estereotipos raciales, promover narrativas diversas y visibilizar voces afrodescendientes. También propone fortalecer las alianzas entre la sociedad civil afro, la academia y el Estado, para que las políticas se construyan desde la evidencia y la experiencia concreta de las desigualdades.

El reconocimiento de la identidad afrodescendiente ha sido un paso fundamental para visibilizar las brechas y colocar el tema en la agenda pública. La incorporación de la autoidentificación étnico-racial en censos y encuestas permitió contar con información más precisa sobre las diferencias en bienestar y acceso a derechos. Sin embargo, la existencia de datos no garantiza la acción. Muchos espacios institucionales carecen de un enfoque orientado a resultados, lo que limita su impacto y desalienta la coordinación interinstitucional. A esto se suma la baja representación afrodescendiente en los ámbitos de poder, tanto públicos como privados, lo que reduce su capacidad de incidencia en la formulación de políticas públicas que aborden sus necesidades específicas. El marco normativo vigente tampoco ofrece todavía garantías suficientes para la protección de las víctimas de discriminación racial.

Algunos datos relevantes

La exclusión socioeconómica de la población afrodescendiente es persistente y multidimensional. Entre 2006 y 2023, la pobreza en los hogares afro fue sistemáticamente más del doble que en los no afro. Aunque en la última década se redujeron los niveles generales de pobreza, la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 profundizó las desigualdades y afectó de forma desproporcionada a los afrodescendientes.

El 23.9% de los hogares afrodescendientes vive en situación de pobreza, frente al 12.3% de los hogares no afrodescendientes. El promedio nacional es de 13.4%. Cuando se analiza la pobreza a nivel de personas, se observa que el 28.7% de los afrodescendientes se encuentran en situación de pobreza, frente al 15.7% de los no afrodescendientes. Esta diferencia implica que los afrodescendientes enfrentan un riesgo de pobreza considerablemente mayor. El promedio nacional, que integra ambos grupos, se sitúa en 17.3%.

Si bien mejoraron algunos indicadores de salud y educación, el acceso a una vivienda adecuada sigue siendo una de las principales limitantes. Un porcentaje mucho mayor de personas afrodescendientes vive en asentamientos irregulares, con implicaciones graves para su bienestar y estabilidad económica, que colaboran en perpetuar la reproducción intergeneracional de la pobreza.

La concentración de la población afrodescendiente en los sectores menos productivos y en barrios segregados limita su movilidad social. Tanto en Montevideo, como en las ciudades capitales del interior del país donde existe mayor proporción de población

afrodescendiente, hay un patrón de segregación residencial asociado con las características étnico-raciales de las personas, que se asocia con el fenómeno de los asentamientos irregulares. En el período 2022-2023, el 11,3% de la población afrodescendiente residía en asentamientos, en tanto el 4,4% de la población no afro vivía en esos lugares; en el mismo período en Montevideo el 18,5% de las personas afro residían en asentamientos irregulares, frente a 7,5% de las no afro.

El censo 2023 mostró un crecimiento significativo de la población afrodescendiente: pasó de 8,1 % en 2011 a 10,6 % en 2023, un aumento del 31 %. En otras palabras, por cada 10 personas que se auto percibían afrodescendientes hace 14 años, hoy hay más de 13, lo que marca una presencia cada vez más visible en la sociedad uruguaya.

Artigas y Rivera lideran en porcentajes de población afrodescendiente: Artigas pasó de 17.1% a 22.3% (30% de aumento en ese departamento) y Rivera de 17.3% a 21.4% (24%). Tacuarembó, que en 2011 tenía 9.9% subió al tercer lugar en 2023 con 15.4% (56% de aumento). Salto, ahora cuarto, alcanzó el 14.8% (49% de aumento). Cerro Largo, que contaba con 10.9% en 2011, quedó en quinto lugar con 13.2% (21% de aumento, el menor). Montevideo, con la mayor cantidad absoluta de afrodescendientes, creció de 9% a 11% (22%).

Otros departamentos muestran cambios más rápidos, como Colonia de 3% a 4.9%, (con +63%); Flores de 3.6% a 5.4%, (con +50%) y Soriano de 3.3% a 5.9%, (con +79%) tienen las proporciones más bajas, pero tasas de crecimiento elevadas.

Artigas, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y Salto son los cinco departamentos con más porcentaje de población afrodescendiente y a la vez los que presentan los peores desempeños en términos de desarrollo humano y territorial, de acuerdo con dos indicadores sintéticos estimados para el año 2015: el Índice de Desarrollo Humano Departamental del PNUD y el Índice de Desarrollo Departamental, elaborado por el Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) para la OPP.

Los afrodescendientes están sobrerrepresentados en sectores menos productivos de la economía, lo que limita sus ingresos y posibilidades de ascenso social. Esta concentración sectorial refleja barreras estructurales en el acceso a empleos de mayor calidad y remuneración.

La representación afrodescendiente en espacios de decisión continúa siendo marginal. Un relevamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indica que menos del 2 % de las personas afrodescendientes ocupa cargos de liderazgo en el sector público. La participación es algo mayor en sindicatos y organizaciones sociales, pero insuficiente para equilibrar la falta de representación en los principales espacios de poder político y económico.

El análisis de la normativa nacional vinculada con la población afrodescendiente muestra un claro desbalance entre las políticas de reconocimiento y las de redistribución. De las 14 medidas vinculadas a la población afrodescendiente, solo la Ley 19122 constituye un antecedente de acción redistributiva. Además, una de las principales debilidades de la institucionalización del enfoque étnico-racial es que la mayoría de las estructuras institucionales vinculadas a la temática afrodescendiente se orienta a procesos (capacitaciones, asesorías, coordinación interinstitucional), pero no a resultados.

Los mecanismos antidiscriminación han mostrado escasa efectividad, y muchas personas no denuncian los casos de racismo por desconfianza o por temor a represalias. También los mecanismos institucionales han demostrado ser ineficaces para fomentar una participación política más equitativa, por ejemplo, en el ámbito del Presupuesto

Participativo de Montevideo las propuestas de zonas con alta población afro representan una fracción mínima de las iniciativas aprobadas, lo que refleja la baja incidencia de este grupo en la toma de decisiones locales.

Reducir las brechas educativas y la segregación escolar es clave para romper el círculo de la pobreza. Aunque la educación actúa como un factor protector contra la pobreza, las brechas educativas persistentes limitan este efecto positivo en la población afrodescendiente.

En el caso de los hogares afro cuyos jefes completaron la educación secundaria o terciaria, reduce en aproximadamente un 12% la probabilidad de ser pobre (Banco Mundial, 2018: 78). Por esta razón, los logros educativos son un factor clave para comprender las desigualdades existentes entre la población afrodescendiente y el resto.

Existe una brecha educativa sistemática entre la población afro y la no afro, que se manifiesta tanto en los años de educación como en el rendimiento en las pruebas PISA. Los afrodescendientes exhiben mayores dificultades para mantener una trayectoria educativa regular, lo que se refleja en las tasas de extraedad y las diferencias entre asistencia bruta y neta.

Estas desventajas impactan en el mercado laboral, en promedio los trabajadores no afro ganan un 28 % más por hora que los trabajadores afrodescendientes, y las mujeres afro enfrentan una brecha salarial del 32 % respecto de las mujeres no afro. Acortar las brechas existentes en los niveles y la segregación educativos entre la población afro y no afro resulta un elemento fundamental para cortar con el círculo de pobreza.

El análisis de la normativa nacional vinculada con la población afrodescendiente muestra que existe un importante desbalance entre las políticas de reconocimiento y las de redistribución, siendo la Ley N° 19122 de acciones afirmativas el único antecedente de medidas redistributivas de un total de 14 vinculadas a la población afrodescendiente.

De los 15 espacios institucionales especializados en la temática afrodescendiente vigentes desde 2004 hasta el presente, desde el punto de vista funcional, solo la recientemente creada División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes del MIDES tiene la autonomía suficiente y el presupuesto para orientarse a la producción o monitoreo de resultados, mientras que el resto se centra en procesos.

Entre 2004 y 2024, se crearon 33 espacios institucionales vinculados a la promoción de la equidad étnico-racial en diferentes ámbitos institucionales. Se trata de espacios frágiles, en su mayoría sin presupuesto, y orientados a procesos. Dado que la gran mayoría de ellos ha estado a cargo de líderes del movimiento negro organizado, es posible conjeturar que, al igual que otros países de América Latina, son el producto de la cooptación de los líderes sociales, como mecanismo para disminuir el conflicto social. Esta forma de institucionalización implica socavar y fragmentar el liderazgo de los movimientos sociales.

Aunque la educación actúa como un factor protector contra la pobreza, las brechas educativas persistentes limitan este efecto positivo en la población afrodescendiente. Existe una brecha educativa sistemática entre la población afro y la no afro, que se manifiesta tanto en los años de educación como en el rendimiento en las pruebas PISA. Los afrodescendientes exhiben mayores dificultades para mantener una trayectoria educativa regular, lo que se refleja en las tasas de extraedad y las diferencias entre asistencia bruta y neta.

El desempleo muestra una de las brechas más notables. La población afro consistentemente enfrenta tasas más altas, llegando a una diferencia de casi 4% en ciertos períodos.

La crisis del COVID-19 amplió esta brecha, y aunque hubo cierta recuperación, la disparidad persiste (13.4% para afros versus 8.7% para no afros en 2020-2023)

En los últimos diez años, no se observan cambios significativos en la participación de los afrodescendientes por rama de actividad, lo cual señala limitaciones en la movilidad económica de los afrodescendientes. Al analizar la segmentación laboral según sectores de productividad, se observa que los trabajadores afro se desempeñan en los sectores menos productivos de la economía, lo que sugiere que no ha habido cambios importantes en la inserción laboral de los trabajadores afro. Nuevamente, las mujeres afro son el grupo menos favorecido, presentando mayores niveles de participación en los sectores menos productivos de la economía.

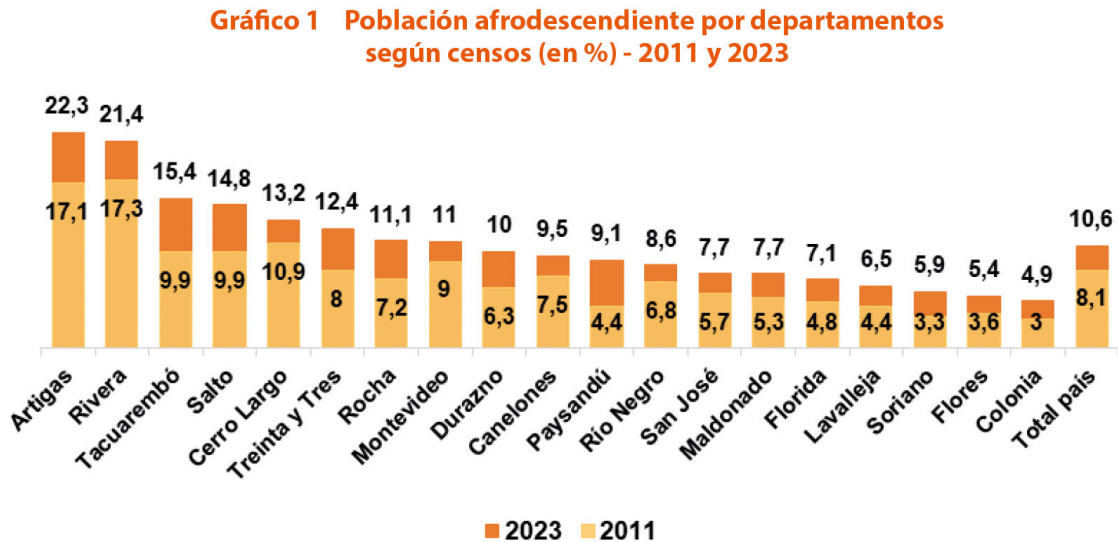
El cumplimiento promedio de la cuota durante los 10 años considerados ha sido de 1.8%. En relación con el promedio de cumplimiento, debe considerarse el efecto del período de pandemia de COVID-19 en el período 2020-2021. El año de mayor cumplimiento de la cuota fue 2018, y no sobrepasa el 50% del cumplimiento de la cuota.

En materia de políticas afirmativas, la Ley N.º 19.122 presenta problemas de diseño e implementación en términos de inclusión laboral y acceso a capacitación productiva. En el área laboral, la información es problemática, dado que, en promedio, 45% de los ingresos han sido al Ministerio de Defensa, lo que distorsiona los resultados de la implementación de la ley en el sector público. Esto contrasta con las medidas afirmativas vinculadas a la educación, donde la cuota establecida por la ley ha cumplido e incluso excedido el mínimo necesario para el cumplimiento de la cuota.

El informe recuerda que, en 1903, W. E. B. Du Bois sentenció que «el problema del siglo xx es el problema de la línea de color». Esa frontera marcada por divisiones y desigualdades entre blancos y negros no desapareció, mutó. Hoy sus ecos siguen marcando las oportunidades de millones de personas.

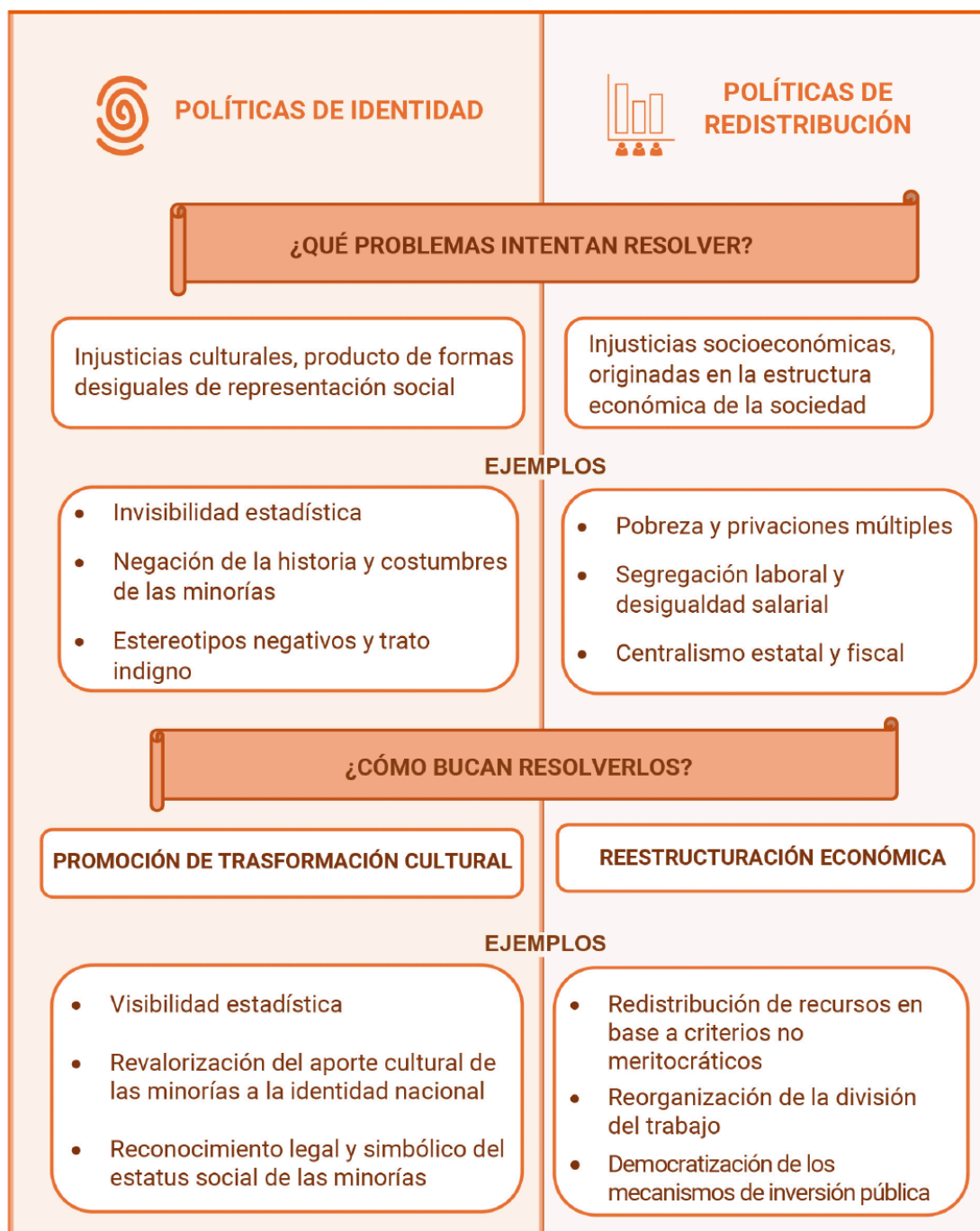
Romper esos «ecos» de la «línea de color» en Uruguay implica pasar de la sensibilización a la acción: medir, invertir y rendir cuentas. Porque la equidad racial no es solo una deuda histórica, sino una condición para el desarrollo, la cohesión, el presente y el futuro del país.

Anexo – Gráficos, esquemas y cuadros extraídos de la publicación «Ecos de la Línea de Color. Afrodescendientes e inclusión en Uruguay»



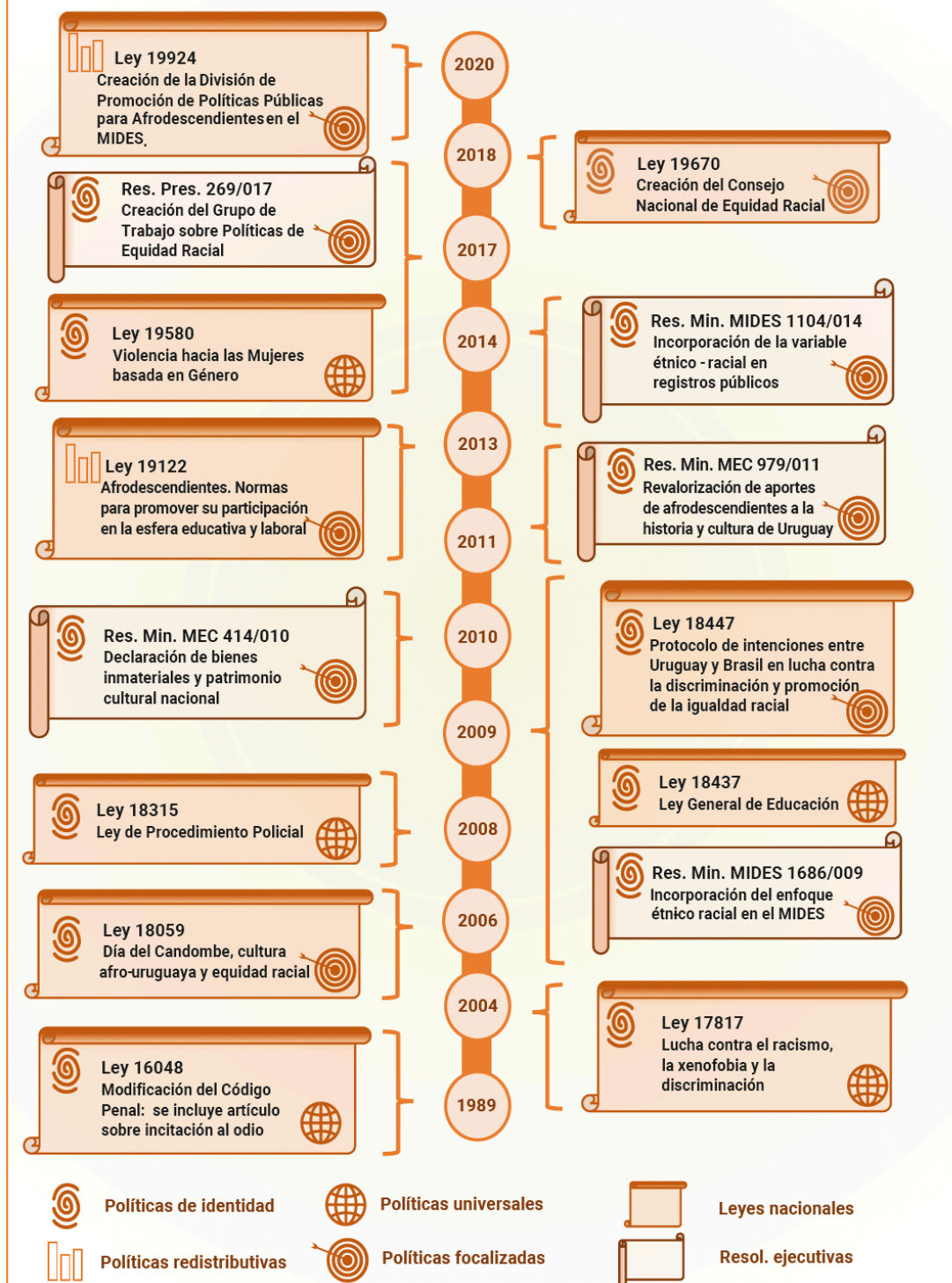
Fuente: elaboración propia en base a los censos 2011 y 2023.

Esquema 6
Ideas clave:
Políticas de identidad y redistribución



Fuente: elaboración propia en base a Fraser y Honneth (2003) y Fraser (2009)

FIGURA 3 NORMATIVA NACIONAL SOBRE POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE, 1989 - 2025



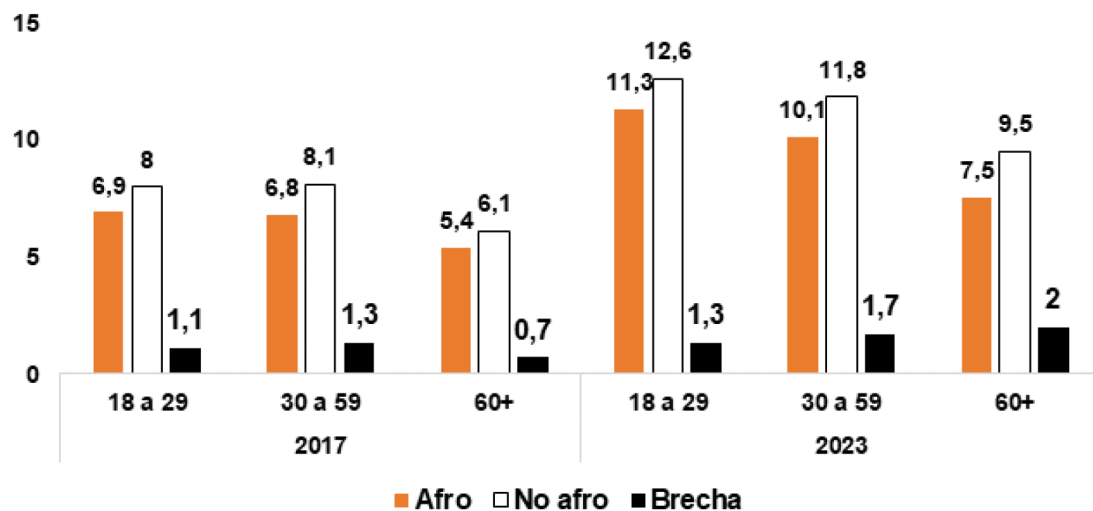
Fuente: elaboración propia en base a registros administrativos.

Esquema 7

INCLUSIÓN POLÍTICA Y POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE: PRINCIPALES CONCLUSIONES

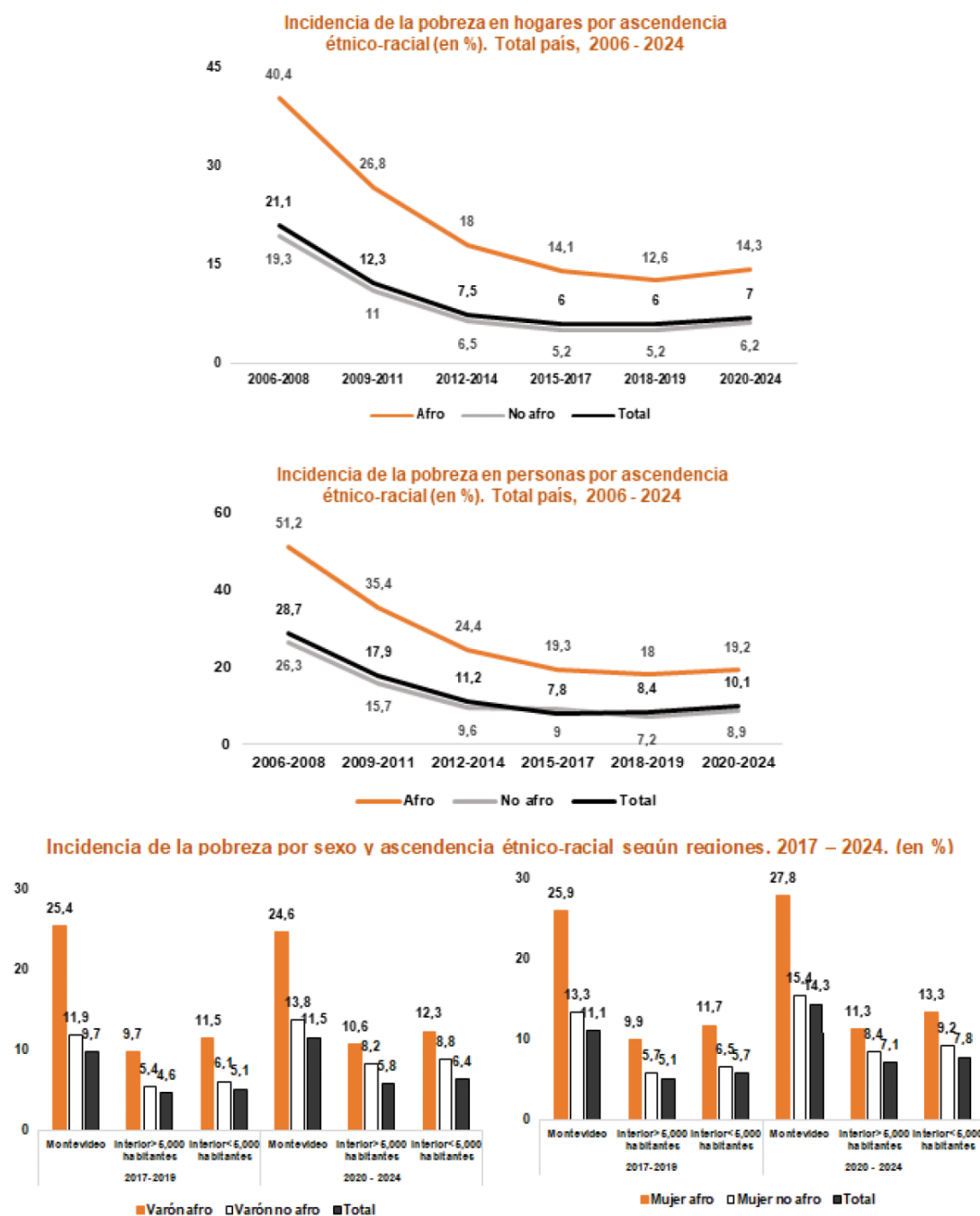


Gráfico 20 Promedio de años de educación por tramos de edad y ascendencia étnico-racial (en%) 2017 y 2023



Fuente: elaboración propia en base a datos de la ECH 2017 – 2023.

FIGURA 11 INCIDENCIA DE LA POBREZA MONETARIA EN HOGARES Y PERSONAS. TOTAL PAÍS, 2006 – 2024



Esquema 8

INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA Y POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE: PRINCIPALES CONCLUSIONES

Propiedad y asentamientos irregulares

Una proporción significativa de los propietarios afro que lo son solamente de la vivienda reside en asentamientos irregulares. Una proporción importante de los afro reside en asentamientos irregulares.

Desigualdades en el bienestar

Los hogares y las personas afro presentan mayores niveles de incidencia de pobreza que los no afro.



Brecha educativa

Existen diferencias sistemáticas en los años de educación y el rendimiento académico en pruebas PISA entre los afro y los no afro. Los afro presentan mayores dificultades que los no afro para sostener la trayectoria educativa.

Esquema 9

INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE: PRINCIPALES CONCLUSIONES

Menor participación en el mercado de trabajo

Persisten los desafíos al acceso del mercado laboral, observando una menor tasa de empleo y mayor tasa de desempleo de los afro respecto a los no afro.

Segmentación sectorial del empleo

Los trabajadores afro se concentran en sectores menor productivos que lo no afro, limitando su movilidad económica.

Disparidades salariales

Existe evidencia sobre brechas salariales entre trabajadores afro y no afro, siendo las mujeres afro las que enfrentan las mayores disparidades.



Políticas afirmativas

Existen problemas de diseño e implementación de las políticas destinadas a mejorar la inserción laboral de los afro en el ámbito público.

2. DESDE SUS VOCES. CAMINOS DE VIDA DE MUJERES AFROURUGUAYAS Y AFROMIGRANTAS DE PAYSANDÚ, RIVERA Y SALTO.

Síntesis

Las trayectorias de vida reunidas en el informe ponen rostro y voz a una realidad estructural: las mujeres afrouuguayas y afromigrantes siguen enfrentando desigualdades que no se explican por decisiones individuales, sino por la persistencia del racismo y el sexismo en la sociedad uruguaya. En Paysandú, Rivera y Salto, sus testimonios revelan una triple frontera: la del género, la del color de piel y la del territorio.

El estudio —el primero de este tipo en esos departamentos— muestra cómo la intersección entre género, raza y territorio genera desventajas acumuladas. Las mujeres afrouuguayas y afromigrantes padecen exclusión laboral, precariedad económica, dificultades de acceso a derechos y procesos complejos de reconocimiento identitario. Estas situaciones no son excepciones, sino parte de un patrón que se repite en otras zonas del litoral norte.

El informe identifica tres ejes clave para orientar las políticas públicas. En identidad y cultura, destaca que el reconocimiento étnico-racial suele llegar en la adultez, vinculado a la memoria familiar y las prácticas culturales.

En lo laboral, persisten la segmentación ocupacional, el empleo informal y los techos salariales. En migración y movilidad, las mujeres afromigrantes enfrentan obstáculos adicionales derivados de la falta de protección social y de las condiciones administrativas que las dejan en situación de vulnerabilidad. Estos ejes exigen respuestas integradas y con enfoque territorial.

El estudio recomienda producir datos desagregados por sexo, etnia y territorio; incorporar la perspectiva étnico-racial en políticas de empleo, vivienda y salud; garantizar la participación de referentes afro en el diseño y monitoreo de programas, y financiar iniciativas productivas lideradas por mujeres afrodescendientes.

También propone que se visibilicen trayectorias y demandas concretas, y que los medios eviten los estereotipos, amplifiquen voces locales y sitúen los relatos en su contexto estructural, no como casos aislados.

El enfoque territorial aparece como condición indispensable para lograr intervenciones adecuadas. Se requiere trabajo interinstitucional y evaluaciones constantes que midan el impacto de las políticas y aseguren avances reales.

El informe destaca además la necesidad de incluir a niñas, niños y adolescentes afrodescendientes en las políticas públicas, dado su peso demográfico y la vulnerabilidad socioeconómica que afecta a muchos hogares afro.

La propuesta es pasar a un enfoque de desarrollo, traduciendo los compromisos normativos en presupuestos y resultados verificables.

Algunos datos relevantes

Aunque se registran ciertos avances, las brechas persisten. A las desigualdades económicas y sociales que afectan a las personas afrodescendientes se suman las de género.

El estudio incorpora al análisis, además de la tríada género, raza y clase, el estatus migratorio, para atender al fenómeno de la «afrofeminización» de las migraciones.

En los testimonios de las mujeres afrouruguayas aparece la importancia del autorreconocimiento como mujeres negras y el proceso de aceptación en una sociedad que, muchas veces, negó o invisibilizó esa identidad. Asumen ese camino como una construcción cargada de desafíos estéticos, culturales y educativos. El autorreconocimiento se transforma en un acto de autonomía: muchas encuentran en la estética y la moda una herramienta de resistencia política y de afirmación identitaria.

En la mayoría de los casos, las entrevistadas se reconocen como negras, pretas o afrodescendientes, y reivindican la posibilidad de nombrarse con sus propias palabras, sin imposiciones externas.

Las desigualdades estructurales se expresan con fuerza en la educación y el trabajo. En el ámbito educativo, las vivencias de acoso o discriminación racial aparecen en los relatos personales y familiares, y continúan afectando a niños, niñas y adolescentes afrodescendientes. El racismo, aprendido desde la infancia, sigue operando como un obstáculo para la permanencia y el desarrollo en la educación formal.

En el mundo laboral, las mujeres afrodescendientes siguen concentradas en tareas domésticas, de cuidado y de servicios, con menos oportunidades de ascenso o diversificación. Perciben diferencias tanto frente a los varones como respecto a las mujeres no afro.

Las tareas de cuidado atraviesan casi todas las historias. La mayoría de las mujeres entrevistadas ha cuidado o cuida niños, personas mayores o con discapacidad, tanto dentro de su familia como en empleos remunerados. Esa doble carga laboral refuerza la desigual distribución del tiempo y la energía, configurando una «doble jornada» que limita su autonomía económica y tiempo para el autocuidado.

El carnaval aparece en el estudio como un espacio de visibilidad y orgullo. Allí, muchas mujeres afro encuentran reconocimiento, liderazgo y sentido de pertenencia. Participan en la danza, la música o la interpretación de personajes tradicionales, pero también en la confección de vestuarios y en la organización. El carnaval se convierte así en un ámbito de empoderamiento colectivo, de valorización de la vida y de construcción de autoestima, además de un espacio integrador que trasciende la clase o la ascendencia.

La participación comunitaria y las redes de apoyo también resultan fundamentales para la integración de las mujeres afromigrantes. La comida, la música y las tradiciones funcionan como herramientas de resistencia simbólica y cultural, ayudan a construir comunidad y refuerzan la apropiación del territorio.

Sin embargo, su acceso a derechos continúa condicionado por la combinación de racismo, sexismo y estatus migratorio. Estas barreras limitan el acceso a la salud, la vi-

vienda, la educación y el empleo, profundizando desigualdades que afectan a toda la población migrante, pero con mayor impacto en las mujeres afro.

Las instituciones con programas de apoyo, tanto del Estado (como el MIDES) como de organismos internacionales (Unicef y OIM), son fundamentales para su inserción social.

Algunas mujeres afromigrantes relatan que en sus países de origen no habían sufrido discriminación racial, pero sí la experimentaron en Uruguay, especialmente a través de situaciones que involucraron a sus hijos e hijas. Esto confirma que el racismo sigue operando desde edades tempranas y actúa como barrera estructural para el acceso y la permanencia en el sistema educativo.

Escuchar estas voces no es un gesto simbólico. Es una hoja de ruta para reducir brechas, fortalecer territorios y cumplir con el principio de igualdad que sustenta la democracia uruguaya. Las mujeres afrodescendientes no piden favores, reclaman justicia y oportunidades para aportar —en igualdad de condiciones— al desarrollo del país.

EDUARDO DELGADO

3. FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS AFRODESCENDIENTES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONALES: VISIBILIDAD ESTADÍSTICA Y ACCIONES AFIRMATIVAS

Síntesis

En Uruguay, nacer afrodescendiente sigue marcando el destino, lo que enfrenta al país a tomar decisiones en su camino hacia la igualdad real.

El presente informe revela que las brechas étnico-raciales siguen reproduciéndose, pese a décadas de normativas y discursos inclusivos. Alineado con el principio de «no dejar a nadie atrás» de la Agenda 2030, se expone un hecho persistente: la invisibilidad no es sólo simbólica, sino un mecanismo concreto de pobreza y exclusión.

Las personas afrodescendientes en Uruguay continúan con menores oportunidades de acceso a educación de calidad, empleo formal y ejercicio pleno de derechos. No se trata de un rezago coyuntural, sino de una desigualdad histórica que el país aún no logra revertir. Los datos son claros, quienes se autoidentifican como afrodescendientes tienen 2,5 veces más probabilidad de vivir en pobreza crónica, lo que evidencia que la desigualdad está racializada.

El documento reconoce avances en la inclusión de variables étnico-raciales en las estadísticas nacionales, pero advierte que los datos siguen siendo insuficientes para rediseñar políticas que contemplen la diferencia. Las políticas universales, sin componentes afirmativos, continúan dejando atrás al colectivo afrodescendiente. La equidad exige igualdad formal, reconocimiento explícito y acción concreta.

La persistencia del racismo institucional refuerza la exclusión y genera costos humanos y económicos para todo el país: limita la productividad, encarece las políticas redistributivas y debilita la cohesión social. A más de una década de la creación de mecanismos de equidad racial, Uruguay carece aún de una política estatal articulada para la población afrouruguaya. Las acciones ministeriales han sido fragmentadas y sin continuidad.

El análisis se organiza en tres ejes principales:

Educación. Incorporar la perspectiva étnico-racial en los contenidos, la formación docente y la institucionalidad educativa es esencial para revertir el patrón segregativo heredado.

Empleo. Se necesitan mecanismos específicos —cuotas, becas, incentivos, mentorías— que reviertan la discriminación estructural en el mercado laboral. Las desigualdades no se corrigen por inercia.

Políticas públicas. La transversalidad étnico-racial debe transformarse en principio rector de los diseños institucionales, los presupuestos y los resultados y no ser una mención de buenas intenciones.

El informe propone un conjunto de recomendaciones, entre ellas fortalecer los sistemas de información con datos desagregados por etnia, género y territorio, establecer acciones afirmativas efectivas (becas, programas de empleo específicos, cuotas de ingreso, mentorías que actúen sobre desigualdades acumuladas), garantizar la transversalidad de la perspectiva racial en todos los niveles de gestión y aplicar un enfoque interseccional que contemple las desigualdades simultáneas de raza, género, clase y territorio, lo que hace que ciertas personas sean doble o triple veces invisibles. También plantea coordinar esfuerzos entre instituciones, sociedad civil y academia, con gobernanza, recursos y seguimiento sostenido.

El estudio destaca el papel clave del sistema educativo. Incorporar la dimensión étnico-racial implica revisar por qué tantas personas afrodescendientes abandonan tempranamente los estudios, enfrentan tasas menores de ingreso o permanecen infrarrepresentadas; sumarle asegurar condiciones equitativas para su permanencia y buscar medidas afirmativas que garanticen igualdad de condiciones. Advierte que las políticas universales sin enfoque diferencial tienden a aumentar las brechas.

En el ámbito laboral, el cumplimiento de la Ley 19122 —que establece el registro de la variable étnico-racial y un 8 % como mínimo de cupo en el ingreso al Estado— sigue siendo bajo. El informe invita a las instituciones a preguntarse cuántas personas afrodescendientes ocupan cargos de decisión y qué barreras invisibles persisten. La inclusión real requiere metas, evaluación y recursos.

En el plano de las políticas públicas nacionales y departamentales, se propone articular tres dimensiones: reconocimiento de la etnicidad mediante etnopolíticas; igualdad racial con acciones afirmativas sostenidas; y desarrollo territorial con énfasis en zonas rezagadas. Adoptar este marco supone integrarlo en la planificación presupuestal, la coordinación interinstitucional y la formación de funcionarios.

Incorporar la perspectiva étnico-racial no es un agregado temático, sino una estrategia de eficacia y calidad de las políticas públicas. Los indicadores demuestran que las personas afrodescendientes no parten desde la misma base que otros grupos; sin ese reconocimiento, las políticas universales reproducen desigualdades.

El informe también llama a fortalecer la comunicación pública. Desarrollar estrategias de divulgación y campañas de sensibilización para que la sociedad comprenda el alcance de estas políticas. Los medios de comunicación deben evitar estigmatizar o invisibilizar a la población afrodescendiente y, en cambio, destacar su protagonismo, desafíos y contribución al país. Colocar las brechas raciales en el centro del debate público y no solamente como un tema marginal o culturalfolclórico es parte de la responsabilidad democrática.

Algunos datos relevantes

La ascendencia afro incide directamente en las condiciones de ingreso y residencia. Estudios del UNFPA, el Banco Mundial y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto confirman obstáculos estructurales en la implementación de políticas para la po-

blación afrodescendiente, entre ellos la falta de institucionalidad y financiamiento adecuados.

El racismo estructural y la omisión política limitan el impacto de las iniciativas inclusivas. Desarrollar un marco analítico crítico es clave para evaluar los resultados del Censo 2023 y orientar nuevas estrategias. Una inclusión efectiva fortalecería la matriz social y económica del país con mayor formalización laboral, mejores ingresos, reducción de la pobreza infantil y mayor sostenibilidad fiscal.

Uruguay ha abordado históricamente las políticas afrodescendientes desde un enfoque principalmente cultural e identitario, con escasa articulación con políticas redistributivas. Las grandes campañas tuvieron baja incidencia real sobre las brechas. La falta de prioridad institucional en la recolección de datos étnico-raciales dificulta medir impactos concretos.

La incorporación de variables étnico-raciales no ha sido una prioridad histórica para muchos espacios institucionales, lo cual ha limitado la evaluación de la efectividad de sus programas a métricas de procesos y no de resultados concretos en la mejora de las condiciones de vida de la población afrodescendiente.

El análisis histórico muestra un proceso irregular, sin continuidad ni acumulación institucional, con avances parciales y retrocesos. En muchos casos, la pérdida de impulso de la agenda pública afectó también la organización social del movimiento afrodescendiente.

Un aspecto crítico es la situación de la infancia afrouroguaya, que enfrenta desventajas severas en educación, salud y desarrollo. La pandemia de COVID-19 agravó estas brechas, haciendo aún más visibles las diferencias entre los hogares afro y no afro, y agudizando el presente y la vida a mediano plazo de estas familias, en particular en niños y niñas menores de cinco años. El impacto de la crisis sanitaria —y el vacío de las medidas específicas para estos hogares— continúa amplificando las disparidades existentes.

La comunidad afrodescendiente se compone de mayor cantidad de personas en edades jóvenes comparativamente a la población en general, definidas por la tasa de natalidad aun positiva como por probables tasas altas de mortalidad en edades tempranas (posterior a los sesenta años) en comparación a la población general.

El censo de 2023 registra entre 2 y 3% de población extranjera, con presencia creciente de comunidades venezolanas, cubanas, colombianas y dominicanas. Este fenómeno podría implicar que el país comienza un proceso de «ennegrecimiento masivo» que no solo puede incidir en el porcentaje de población de ascendencia afro/negra sino que también desafía a las políticas públicas a responder a nuevas formas de diversidad e históricos problemas de inclusión.

Elevar la equidad racial como prioridad institucional, posicionar la voz afrodescendiente como agente activo y no solo como beneficiaria de la política pública, promover un cambio cultural que reconozca la diversidad como valor de desarrollo son pasos urgentes. Implementar estas recomendaciones permitirá avanzar hacia una nueva generación de políticas centradas en la reparación de desigualdades históricas y la promoción efectiva de derechos.

Incluir la perspectiva étnico-racial no es un gesto simbólico: es condición de calidad democrática, cohesión social y desarrollo sostenible. Ignorarla compromete la Agenda 2030 y perpetúa desigualdades. El llamado es a transformar diagnósticos en políticas con datos y participación, dar voz real a las personas afrodescendientes y construir un país que, de verdad, no deje a nadie atrás.

EDUARDO DELGADO

4. ESTADO DE SITUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE ACCIÓN AFIRMATIVA DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE Y LEY 19122

Síntesis

A más de una década de aprobada la Ley 19122, que consagra medidas de acción afirmativa para la población afrodescendiente, Uruguay enfrenta un balance preocupante.

El informe muestra que las brechas sociales, económicas y laborales entre afrodescendientes y el resto de la población uruguaya se mantienen prácticamente intactas.

El documento combina datos cuantitativos, entrevistas institucionales y un relevamiento de 38 organismos públicos. Las conclusiones son rotundas: el cumplimiento de la cuota del 8% de ingresos laborales al Estado es mínimo, la pobreza afrodescendiente duplica la media nacional y la discriminación racial continúa siendo estructural.

Aprobada en 2013, la Ley 19122 fue un hito al reconocer la responsabilidad histórica del Estado en la esclavitud y la exclusión racial. Su artículo 4º dispone que los organismos públicos deben destinar al menos un 8% de los nuevos ingresos a personas afrodescendientes, además de promover su acceso a becas y programas de capacitación. Más de diez años después el avance es escaso. Solo el 1,8% de los ingresos laborales al Estado en 2022 correspondieron a personas afrodescendientes, por debajo del 3,29% de 2018, el año que el porcentaje de cumplimiento fue más alto desde que la ley está vigente y que no llegó a la mitad de lo previsto en el texto de la norma. La baja ejecución no responde a falta de población ni de normativa, sino a la persistencia del racismo institucional y la ausencia de voluntad política.

El informe señala además graves carencias en la recolección y publicación de información étnico-racial. Muchos organismos no registran la autoidentificación, lo que impide evaluar el impacto de las medidas y debilita la rendición de cuentas. Tampoco existe información consolidada sobre becas y capacitaciones, y las políticas afirmativas educativas y laborales se aplican de forma fragmentada y con recursos limitados.

Las entrevistas con funcionarios públicos revelan desconocimiento del contenido de la Ley 19122 y resistencia a su aplicación. Persisten prácticas y actitudes de racismo institucional que limitan el ingreso y la promoción de personas afrodescendientes dentro del Estado. En muchos casos, los llamados incluyen la cuota pero el ingreso efectivo no se concreta.

Pocos organismos realizan actividades de sensibilización o capacitación en equidad racial, aunque el estudio identifica en muchos el interés en ser formados. Entre las bue-

nas prácticas destacan el programa de capacitaciones del MIDES, el Fondo Marielle Franco de la Intendencia de Montevideo, el seguimiento de participantes afrodescendientes del INEFOP y los espacios de articulación institucional de las Intendencias de Cerro Largo y Rocha.

La investigación subraya la necesidad de un enfoque interseccional, ya que por ejemplo las mujeres afrodescendientes enfrentan una doble desigualdad —por género y raza— que las ubica en los sectores más precarios y con mayores tasas de informalidad. También reclama políticas de desarrollo territorial que contemplen las realidades departamentales donde la población afrodescendiente es proporcionalmente mayor.

Entre los avances institucionales se resalta la creación de la División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes del MIDES, que consolidó una agenda y un presupuesto para la equidad racial. Sin embargo, la mayoría de los Mecanismos de Equidad Racial funcionan con recursos mínimos y sin estructura formal.

El estudio enfatiza que la acción afirmativa, por sí sola, no alcanza, por lo que requiere de otras acciones que coadyuven a alcanzar el objetivo trazado. Debe integrarse con políticas de educación, empleo, vivienda y salud que aborden las raíces estructurales de la desigualdad. Por eso es relevante poder conocer efectivamente las causas del rezago educativo y continuar profundizando en acciones concretas que compensen la discriminación estructural vivida. Se torna imprescindible por tanto tener buenos registros que permitan dar cuenta de las situaciones de vida en educación, pero también en salud, vivienda, residencia, entre otras.

Para superar alguno de los obstáculos que hoy no permiten el cumplimiento de la ley, los entrevistados hacen referencia a la necesidad de darla a conocer mediante campañas de información pública. Pero es también necesario que de forma constante y permanente se informe en todos los niveles y para todos los actores, tanto funcionarios, técnicos, como decisores y jerarcas de las políticas públicas.

En sus recomendaciones incluye la creación de un observatorio que monitoree el cumplimiento de la Ley 19122, la publicación de reportes anuales, el fortalecimiento de los registros étnico-raciales y la aplicación de sanciones a los organismos que incumplan. También sugiere fortalecer los vínculos interinstitucionales mediante puntos focales en cada organismo y crear espacios de diálogo con las organizaciones sociales.

La investigación plantea la necesidad de generar nuevos documentos y campañas que ayuden a comprender mejor el alcance de la ley y a derribar algunos mitos que todavía circulan. Entre ellos, la idea de que los cupos para personas afrodescendientes son ocupados por quienes no lo son, que quienes ingresan por cuota no cumplen los requisitos, o que es imposible aplicarla cuando hay pocos llamados. También persisten creencias como que crear unidades específicas para afrodescendientes sería una forma de discriminación, o que «las buenas personas no somos racistas», (todas las personas somos racistas en la medida que fuimos socializados en una sociedad racista, la diferencia la construiremos en tanto reconozcamos este problema social y cambiemos las condiciones y consecuencias).

Desmontar esos prejuicios es parte del desafío: reconocer el racismo como un problema estructural y entender que las acciones afirmativas no otorgan privilegios, sino que buscan reparar una desigualdad histórica.

La investigación propone elaborar guías para fortalecer los Mecanismos de Equidad Racial desde una perspectiva de género, publicar planes operativos de los organismos e intendencias y coordinar esfuerzos institucionales. También sugiere iniciar un diálogo

para aplicar acciones afirmativas en el sector privado, con materiales específicos y campañas que promuevan por ejemplo un sello de cumplimiento de la ley, inspirado en el Modelo de Gestión de Calidad con Equidad de Género.

Señala que estos Mecanismos de Equidad Racial son una nueva institucionalidad que podría constituir un pilar hacia la deconstrucción del racismo, lo que implica visibilizar que el racismo institucional es sistémico y opera en la estructura económica, social y cultural, impactando en las brechas de desigualdad racial en los distintos ámbitos; considerar que el racismo institucional se retroalimenta con otros mecanismos de opresión y explotación como el sexismo y la heteronormatividad afectando de forma agravada y múltiple a mujeres, niñas y adolescentes.

También reflexionar acerca de que el racismo es una de las líneas fundacionales del Estado nacional y por tanto constitutivo en la reproducción de relaciones y roles asignados a las personas afrodescendientes y no afrodescendientes, tanto en el sector público como en el privado. Visualizar que el racismo constituye una forma de violencia, que como tal afecta los derechos humanos de las personas afrodescendientes y que es necesario conocer sus características particulares dentro de cada sistema: educativo, de salud, laboral, entre otros y reparar las consecuencias del racismo mediante la generación e implementación de acciones adecuadas para cada sector.

Algunos datos relevantes

Garantizar los derechos de las personas afrodescendientes requiere transformar los valores y hábitos colectivos que sostienen la desigualdad. Uruguay aún carga con una «cultura del privilegio» que legitima jerarquías raciales y reproduce desigualdades en educación, salud, empleo y acceso a tecnología. Superarla implica construir una cultura democrática basada en la igualdad de oportunidades.

Incorporar un enfoque étnico-racial a las políticas públicas significa reconocer esas jerarquías injustas y las formas en que se manifiestan. Hablar de racismo sigue siendo incómodo, muchas veces se niega su existencia o se desconoce su funcionamiento. Aunque las razas no existen como categorías biológicas, el racismo sí opera como una construcción social que determina el acceso al poder y a los recursos.

Reconocer su existencia en la sociedad y en el Estado es el primer paso para medir su impacto en la educación, el empleo y la salud, y asumir la responsabilidad de revertirlo. La división racial del trabajo es un ejemplo de racismo institucional: las personas afrodescendientes se concentran en los niveles más bajos de decisión mientras los puestos de poder permanecen mayoritariamente lejos de su alcance.

Para que una política social sea realmente universal debe reconocer las particularidades de los grupos históricamente excluidos. En ese sentido, las acciones afirmativas son herramientas de reparación y compensación de injusticias históricas, mecanismos concretos para revertir la discriminación estructural y garantizar la participación de minorías en la toma de decisiones públicas.

Un aspecto relevante a considerar es que estas políticas deben ser monitoreadas para evitar la estigmatización o que los beneficios lleguen solo a una élite del grupo. Evaluar su impacto de manera permanente, y en tal sentido hacer un seguimiento y monitoreo

de las personas que han ingresado en los organismos en cumplimiento de lo establecido por la ley no es un dato menor, es esencial para mantener su legitimidad y eficacia. Por ello, un desafío a futuro es dar cuenta de los trayectos que las personas construyen a partir de su ingreso a los distintos empleos. Conocer su experiencia, las fortalezas y debilidades y cómo de alguna manera se puede acompañar el camino.

Es preciso profundizar la discusión pública, para desarrollar acciones concretas que sean necesarias para cada grupo: revisando qué mecanismos de discriminación operan, sobre qué grupos y qué acciones son necesarias para revertirlos.

Las posibilidades de acciones afirmativas son diversas y deben desarrollarse con relación a las personas y las situaciones en las que se busca incidir. Las políticas de acción afirmativa tienen como objetivo eliminar el daño injustamente inferido a determinado grupo social; en conjunto con la eliminación del daño deben atacarse la o las causas del mismo, para no perpetuarse en el tiempo sin impacto en la transformación de la realidad del colectivo, lo cual suele tener como consecuencia el crecimiento de las resistencias hacia este tipo de acciones.

Uruguay cuenta con evidencia sólida, las brechas son medibles, las causas están identificadas; los datos están sobre la mesa. Lo que falta es transformar esa evidencia en decisiones políticas sostenidas y medibles. El informe es un llamado a renovar compromisos: que los organismos del Estado cumplan la ley, que los gobiernos departamentales asuman su responsabilidad, que la sociedad civil mantenga la presión y que los medios incorporen la desigualdad racial en la agenda pública.

A doce años de la Ley 19122, el país está ante una encrucijada: puede dejar que la norma quede como un gesto simbólico o convertirla en motor real de equidad. El desafío no es sólo corregir cifras, sino reconstruir el vínculo entre el Estado y una población históricamente invisibilizada y discriminada. Hacerlo no es un acto de caridad, sino una obligación democrática y de justicia histórica.

EDUARDO DELGADO

5. INFORME SOBRE BRECHAS Y PROPUESTAS PARA LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE Y AFROMIGRANTE EN URUGUAY.

Síntesis

A poco más de diez años del inicio del primer Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024), un nuevo informe de Naciones Unidas confirma que las brechas persisten en Uruguay. Las voces afrodescendientes y afromigrantes reclaman pasar del discurso a la acción, con políticas reparatorias, presupuesto y un Estado que asuma el racismo como un problema público.

Uruguay llega al Segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2025-2034) con una verdad incómoda: las brechas raciales no se redujeron lo suficiente. Los datos lo muestran y las voces lo ratifican. Mujeres, hombres, jóvenes y adolescentes afrodescendientes y afromigrantes contaron en una consulta nacional cómo el racismo atraviesa sus días, las zonas donde residen y sus oportunidades.

El estudio combinó una encuesta, entrevistas y grupos focales con organizaciones y referentes afrouuguayos y afromigrantes en todo el país. De ese trabajo surgió un diagnóstico preciso: el ámbito laboral es el principal espacio donde se ejerce el racismo, seguido de los centros educativos y el accionar policial. El color de piel y los rasgos físicos continúan siendo las causas más frecuentes de discriminación y entre las infancias afro se suma el cabello como un motivo reiterado de hostilidad y exclusión.

El racismo no es solo una agresión o un gesto. Es una estructura. Se vuelve cotidiano cuando define quién accede a un empleo, cómo se lo trata en una comisaría o qué oportunidades educativas se abren o se cierran. Por eso, el 69,2% de las personas consultadas identifica el racismo institucional como la principal barrera para el ejercicio pleno de derechos, seguido de la invisibilización y negación (60,4%), el desinterés (53,8%) y la falta de formación (53,2%).

El documento advierte que la respuesta estatal ha sido insuficiente y reclama pasar del compromiso simbólico a la acción sostenida. Recomendamos reforzar la Ley 19122, dotarla de presupuesto, crear mecanismos de seguimiento y evaluación, e incorporar un enfoque antirracista desde la educación inicial. También plantea promover empleo digno, garantizar el derecho a la vivienda, impulsar el emprendedurismo afro, asegurar la validación de títulos y documentación para personas migrantes, y consolidar espacios de diálogo permanentes entre el Estado y las organizaciones afrodescendientes.

Para niñas, niños y adolescentes afro, el informe subraya la importancia de garantizar una alimentación saludable, mientras que en el caso de las personas afromigrantes identifica la salud como la principal brecha frente a otros grupos.

En uno de los grupos focales, la meta fue expresada con nitidez: *un Uruguay donde ser afro no determine oportunidades*.

Entre las demandas más reiteradas aparecen la descentralización territorial, la participación intergeneracional y la necesidad de una política de reparación histórica que reconozca el daño acumulado por siglos de exclusión. El informe llega en un momento clave: Uruguay define su nuevo ciclo de cooperación con Naciones Unidas y prepara los primeros pasos del Segundo Decenio Internacional Afrodescendiente (2025-2034).

Aunque el país cuenta con avances normativos reconocidos, las brechas persisten en empleo, educación, vivienda, salud y representación política y la situación socioeconómica de la población afrodescendiente sigue siendo más precaria que la del resto de la población.

Algunos datos relevantes

Quienes participaron en la encuesta identifican como grupos más discriminados a las personas trans, las mujeres afro y las personas privadas de libertad, seguidas de las personas pobres y afrodescendientes en general.

Al preguntar cuáles son las razones más frecuentes de discriminación que viven las personas afrodescendientes en Uruguay, las opciones que recibieron mayor selección son «por su color de piel» (80,2%) y «por sus rasgos o aspecto físico» (73,6%) y los mismos motivos (58,2%) entre las personas fromigrantes. En niñas, niños y adolescentes afro se repiten esas causas (69,2% y 59,3%), junto con el cabello (60,4%).

Entre las personas que no denunciaron situaciones de racismo, las razones que destacan son la percepción de que «es una pérdida de tiempo» (29,6%), el desconocimiento sobre cómo hacerlo (16,7%) y la normalización de la discriminación (14,8%).

El ámbito laboral es señalado por el 89% como el principal lugar donde se vive el racismo, seguido por centros educativos (83,5%), comisarías (67%) y comercios (65,9%). Ante la pregunta de dónde denunciar, las respuestas más elegidas fueron la Comisión Honoraria contra el Racismo y la Discriminación (70,3%) y las organizaciones afro (67%).

Respecto al rol de los medios de comunicación, el 53,8% considera que reproducen «mucho» estereotipos racistas y el 27,5% que lo hacen «algo».

Casi la mitad de las personas consultadas (49,5%) considera que Uruguay respeta poco o nada los derechos humanos de la población afrodescendiente. Entre las personas migrantes, el porcentaje asciende a 60,5%, y entre la niñez y adolescencia afro a 57,2%. Una vez más evidenciando la necesidad de un abordaje interseccional para ambos casos, dada la complejidad múltiple y agravada.

En tanto, el 57,1% consideran que las garantías de los derechos humanos de las personas afrodescendientes dependen mayormente de los gobiernos de turno. En cuanto a la protección de derechos humanos, el 75,9% cree que la situación se mantuvo igual o empeoró, aunque el 62,6% tiene expectativas de mejora hacia el futuro, lo que podría determinar una confianza para habilitar espacios de diálogo e intercambio entre la ciudadanía y el nuevo gobierno.

Un 38,5% evalúa que el Estado «tal vez» da garantías de protección de derechos humanos a personas afro, un 37,4% considera que el Estado no las da y solo el 16,5% confía

en que el Estado protege efectivamente los derechos afrodescendientes. Estas respuestas dan cuenta de la desconfianza institucional ante el rol del Estado frente a garantías de protección de derechos humanos de las personas afrodescendientes.

Sobre las principales necesidades, destacan el derecho a un trato digno y no ser discriminado (82,4%), a una vivienda digna y entornos incluyentes (79,1%), al trabajo y salario justo (76,9%) y a la educación y participación política (70,3%). Para las personas afromigrantes, las prioridades son el trato digno (83,5%), el empleo (81,3%) y derecho a la educación y a la participación política (70,3%). En niñas, niños y adolescentes afro, los derechos más señalados fueron la educación (91,2%), la salud (81,3%), la alimentación y seguridad alimentaria, y la vivienda (79,1%).

Las autoras del estudio advierten que el desafío es doble: reparar lo dañado y prevenir nuevas exclusiones. Las desigualdades raciales no son residuales, sino estructurales. Para superarlas se necesita decisión política, presupuesto, institucionalidad que coloque la justicia racial en el centro de las políticas públicas, participación de las comunidades afrodescendientes y afromigrantes, y mecanismos de rendición de cuentas.

El documento es una invitación a escuchar, a entender que las estadísticas no son números fríos, sino vidas concretas. Jóvenes que abandonan los estudios por hostigamiento, mujeres afro que ganan menos que sus pares no afro, migrantes que enfrentan la burocracia y la xenofobia. Escucharlos —*desde sus voces*, como dice el otro informe sobre las mujeres del litoral— es el primer paso para que el racismo deje de ser parte del paisaje.

EDUARDO DELGADO

6. PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS AFRODESCENDIENTES DEL VÉRTICE NORTE DEL URUGUAY

Síntesis

A pesar de los avances normativos y del discurso de inclusión, las personas afrodescendientes siguen siendo las más expuestas a la pobreza, el desempleo y el maltrato institucional. En el marco de la Agenda 2030, el país enfrenta una realidad incómoda: las brechas raciales persisten y afectan de manera desproporcionada a la población afrodescendiente y afromigrante.

Así lo confirma este informe que recoge las conclusiones del taller *Producción de conocimiento sobre los derechos de las y los afrodescendientes del vértice norte del Uruguay*, realizado en Salto en 2024. El documento advierte que la igualdad real todavía no alcanza a todos los uruguayos. El racismo, señalan, sigue siendo un obstáculo estructural que impide el pleno ejercicio de los derechos humanos. La convocatoria es a pasar del diagnóstico a la acción transformadora para honrar el mandato de «no dejar a nadie atrás».

La relatoría sobre el taller del que participaron 35 referentes de Uruguay, Argentina y Brasil, tanto de instituciones organizadoras, como investigadores e investigadoras, representantes de la sociedad civil afrouuguayana y de gobiernos locales, recoge las principales recomendaciones: pasar del reconocimiento simbólico a políticas efectivas que garanticen derechos y reparación histórica. Ya no alcanza con describir las brechas, es necesario identificar cómo el racismo institucionalizado no sólo limita el acceso a derechos, sino que también frena la aplicación de las políticas ya existentes.

Varios participantes señalaron que una de las trabas más persistentes es la resistencia dentro del propio Estado. La inclusión de la variable étnico-racial en registros oficiales sigue encontrando obstáculos por falta de sensibilización, e incluso por la abierta oposición de técnicos y jerarcas.

Referentes institucionales, académicos y de organizaciones sociales coincidieron en que las personas afrodescendientes continúan enfrentando barreras estructurales en el empleo, la educación, la vivienda y la justicia. El racismo institucional —que suele operar de forma silenciosa, mediante prácticas y omisiones más que a través de actos explícitos— sigue levantando muros entre la igualdad formal y la igualdad real.

El informe subraya que la reparación histórica no puede limitarse a gestos o conmemoraciones. Requiere políticas activas, presupuestos definidos y mecanismos de seguimiento que garanticen resultados. La Ley 19122, que estableció acciones afirmativas para

la población afrodescendiente, fue un avance pionero en la región, pero su cumplimiento es aún parcial. La falta de control y recursos debilita su impacto, mientras persisten formas de exclusión en los ámbitos laborales y educativos.

Otro punto central es la necesidad de fortalecer la participación afrodescendiente en el diseño y evaluación de las políticas públicas. Los participantes plantearon que, sin esa voz, las decisiones tienden a reproducir sesgos históricos. También coincidieron en que el cambio debe ser cultural, atravesar la educación y la formación de funcionarios públicos. La educación antirracista, la visibilización de la historia afro en los programas escolares y una representación más justa en los medios fueron mencionadas como herramientas imprescindibles para una transformación positiva.

Los testimonios recogidos en el taller muestran que el racismo no sólo se expresa en insultos o exclusiones abiertas, sino también en pequeñas prácticas que naturalizan la desigualdad: desde el comentario supuestamente inocente pero racista o la sospecha policial, a la mirada que discrimina en el aula o en una entrevista laboral.

El informe advierte, además, que la intersección entre racismo y pobreza agrava las brechas. Las mujeres afrodescendientes enfrentan múltiples violencias —racial, de género y económica— y están sobrerrepresentadas en los trabajos más precarios y en los cuidados no remunerados. Esa concentración revela hasta qué punto el racismo se entrelaza con la estructura económica del país.

Algunos datos relevantes

El foco geográfico del taller es de particular importancia: dos tercios de la población afrodescendiente de Uruguay vive en la región del vértice norte —Salto, Artigas, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y Rocha—, donde las condiciones sociales son más precarias y las desigualdades más marcadas.

Los participantes insistieron en que la aplicación de medidas clave, como el registro étnico-racial, tropieza con la falta de sensibilización e incluso la resistencia de funcionarios públicos. Parte de este déficit, señalan, se origina en las aulas universitarias. Muchos profesionales egresan sin haber recibido formación sobre racismo sistémico ni sobre su impacto en la vida cotidiana y las políticas públicas.

Por eso, el informe propone acciones para medir la sensibilización de los tomadores de decisiones en todos los niveles del Estado y promover cambios efectivos en sus actitudes. Reclama también una reforma en la educación superior que garantice entornos de aprendizaje multiétnicos y multiculturales, con conciencia plena de las distintas formas de discriminación.

El desafío académico es doble. Por un lado, enfrentar la subrepresentación persistente de estudiantes y docentes afrodescendientes en la universidad. Por otro, consolidar alianzas entre la academia y las organizaciones afrodescendientes, de modo que la producción de conocimiento responda a demandas concretas de la sociedad civil.

Entre los ejemplos de articulación exitosos se mencionó el Observatorio sobre Racismo y Xenofobia, impulsado por Mundo Afro y el Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio de la Udelar, que reúne investigaciones y datos estadísticos útiles para la incidencia pública. También se planteó la necesidad de estudiar los impactos

diferenciales del extractivismo y el cambio climático en las poblaciones afrodescendientes e indígenas.

El compromiso de Uruguay con la igualdad, el reconocimiento y la justicia está siendo puesto a prueba. Convertir la diversidad en un valor real para el desarrollo exige que el Estado y la academia asuman su responsabilidad histórica, superen la insensibilidad burocrática y eliminen las barreras que siguen postergando a quienes ya viven en desventaja.

Los participantes del taller coincidieron en que la equidad racial debe asumirse como una política de Estado, no como un tema residual. Avanzar hacia una sociedad libre de racismo implica reconocer la deuda histórica, garantizar derechos y transformar las prácticas que sostienen la desigualdad. Porque, como se recordó en Salto, la igualdad no es un punto de llegada, sino una decisión que se construye cada día.

EDUARDO DELGADO

